

**UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO**



**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
ROBO AGRAVADO Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – ACTOS CONTRA EL PUDOR
“ACCIÓN ADMINISTRATIVA CONTENCIOSA”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTORA:

BACH. ISABEL BETZABEL MALDONADO ALDANA

ASESOR:

DR. FERNANDO ARMAS ZÁRATE

ID ORDIC: <https://orcid.org/0000-0002-4390-438X>

DNI N°: 07973958

LIMA - PERÚ

2022

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

ROBO AGRAVADO Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – ACTOS CONTRA EL PUDOR

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTORA:

BACH. ISABEL BETZABEL MALDONADO ALDANA

ASESOR:

DR. FERNANDO ARMAS ZÁRATE

ID ORDIC: <https://orcid.org/0000-0002-4390-438X>

DNI N°: 07973958

LIMA-PERÙ

2022

**MATERIA : ROBO AGRAVADO Y CONTRA LA LIBERTAD
SEXUAL – ACTOS CONTRA EL PUDOR**

N° DE EXPEDIENTE : 16175-2012

AGRAVIADO : DIANA PANTA FIESTAS.

INCULPADO : HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA

BACHILLER : ISABEL BETZABEL MALDONADO ALDANA.

ÍNDICE

I.	SÍNTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.	4
II.	FOTOCOPIA DE LA DENUNCIA FISCAL.....	5
III.	FOTOCOPIA DE AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN	8
IV.	SÍNTESIS DE LA INSTRUCTIVA Y PREVENTIVA.....	16
V.	PRINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS:.....	17
VI.	FOTOCOPIA DE:.....	18
VII.	SÍNTESIS DEL JUICIO ORAL:	26
VIII.	FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR	27
IX.	FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA; DE JUSTICIA DEL PERÚ.	33
X.	DIEZ JURISPRUDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS CON INDICACIÓN DE LA SUMILLA DE EXPEDIENTE QUE HUBIERAN SIDO RESUELTOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y COMPETENTE CON LA INDICACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU NÚMERO, Y EL AÑO SISTEMA PROCESAL MIXTO.....	38
XI.	DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS, COMENTADAS (UTILIZAR EL SISTEMA APA ÚLTIMO), DOCTRINAS CITADAS DEBEN FIGURAR EL COMENTARIO PERSONAL DE ESTAS.....	46
XII.	SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL EN EL SISTEMA PROCESAL MIXTO	61
XIII.	OPINIÓN ANALÍTICA DE TRATAMIENTO DEL ASUNTO SUB MATERIA (PERSONAL).....	62
	Anexo 01: Evidencia de Similitud Digital.....	63
	Anexo 02: Autorización de Publicación en Repositorio	65

RESUMEN DE EXPEDIENTE PENAL

(CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 1940)


I. SÍNTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.

Que, al promediar las 00.30 hrs. del día 09 de julio del 2012, cuando la persona de DIANA PANTA FIESTAS de 19 años de edad, al encontrarse a la altura de la Av. 13 de Enero y Jardines Este del Distrito de San Juan de Lurigancho, sorpresivamente, se aparecieron cuatro sujetos desconocidos, dentro de los cuales se encontraba el intervenido HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA de 19 de edad quienes la rodearon, insultándole con palabras soeces, el intervenido mencionado, le coge del cuello asfixiándola, para que los otros tres restantes, le robe una cartera conteniendo en su interior la suma de S/. 800.00 Nuevos soles, ropa de trabajo, llaves un cargador de celular y otros, para después estos darse a la fuga, al rato fue intervenido HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA siendo puesto a disposición.

- La agraviada DIANA PANTA FIESTAS reconoce plenamente al intervenido HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA como uno de los autores del robo y tocamientos, en su agravio, manifestando que él fue quien le coge del cuello asfixiándole, permitiendo que los demás sujetos cómplices, le roben su cartera, y luego darse a la fuga.

II. FOTOCOPIA DE LA DENUNCIA FISCAL

92


 MINISTERIO PÚBLICO
 SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA
 DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

DENUNCIA: 856 - 2012


SEÑOR JUEZ(A) ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE TURNO DE LIMA.


MELIDA ELIZABETH RODRIGUEZ
 HIDALGO, Fiscal Adjunta Titular Provincial
 (e) de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de
 San Juan de Lurigancho, señalando domicilio
 legal en Calle Las Verdolagas N° 757-
 Urbanización Las Flores del Distrito de San
 Juan de Lurigancho; a usted le digo:

Que, de conformidad con lo prescrito en los incisos 1° y 5° del Artículo 159° de la Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo 11° del Decreto Legislativo No. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público y en mérito de las investigaciones preliminares contenidas en el Atestado Policial N° 310-REG. POL.L.- DIVTER - E1-SJL-CLH-DEINPOL, elaborado por la Comisaría de La Huayrona y demás recaudos que se acompañan; investido de la potestad persecutoria y como titular del ejercicio público de la acción penal, FORMALIZO DENUNCIA PENAL contra **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA (19)**, identificado con DNI N° 47972612, como presunto autor de los delitos contra El Patrimonio - Robo Agravado, contra La Libertad Sexual - Actos contra el pudor, en agravio de Diana Panta Fiestas (18), en virtud de los fundamentos fácticos y jurídicos siguientes:

FUNDAMENTO DE HECHO:

Fluye de las investigaciones preliminares, que con fecha 09 de julio 2012, a horas 00:30 aproximadamente, en circunstancias que la agraviada se encontraba transitando a la altura de la Avenida 13 de Enero y Jardines Este S.J.L., se aparecieron sorpresivamente cuatro sujetos desconocidos entre ellos el denunciado **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA (19)**, siendo que este último la sujeta del cuello (cogoteándola) hasta asfixiarla, mientras que los demás sujetos aprovechan para despojarle de su cartera que contenía sus llaves, documentos personales y la suma de S/80.00 nuevos soles, además de una bolsa plástica conteniendo sus ropas personales, para luego estos darse a la fuga, no sin ante el denunciado hacerle tocamientos indebidos en sus partes íntimas (seno) de forma libidinosa, momentos en que estos hechos son percatados por unos efectivos policiales que se encontraban por el lugar quienes inmediatamente lograron capturar solo al denunciado a quien luego de ser sindicado y reconocido por la agraviada lo condujeron a la Comisaría del sector; asimismo a fojas fojas 10/13, obra la manifestación policial del


 Dña. Melida Elizabeth Rodríguez Hidalgo
 Fiscal Adjunta Titular Provincial
 de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta - S.J.L.


 Segunda Fiscalía Provincial Mixta - S.J.L.

denunciado, quien acepta los cargos incriminados en su contra, quedando de esta manera acreditada su responsabilidad penal. En consecuencia, estando al resultado de la investigación preliminar se colige que existen indicios objetivos, razonables y reveladores de la comisión del delito que se denuncia, así como de la vinculación del denunciado en la materialización del mismo, quien ha aceptado los cargos que se le imputa; por lo que, habiéndose verificado que en el presente caso concurren los presupuestos de procedencia de la acción penal, se deberá iniciar una exhaustiva investigación en sede judicial con la instauración de un proceso penal con las debidas garantías.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Los hechos denunciados se encuentran tipificados en el artículo 188° como tipo base, en concordancia con circunstancias agravantes contenidas en la primera parte del Art. 189 – Incs. 2° y 4°, así como en el primer párrafo del artículo 176° del Código Penal vigente.

PRUEBAS:

Conforme a lo previsto en el artículo 14° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la suscrita ofrece el mérito del Atestado Policial N° 186-2011-VII-DIRTEPOL-DIVTER-ESTE1-SJL-CLH-FAMILIA y de más recaudos; además solicita al juzgado cumpla con la actuación de las siguientes diligencias:

1. Se reciba la declaración Instructiva del denunciado.
2. Se recabe los Antecedentes Policiales, Penales y Judiciales del denunciado.
3. Se reciba la declaración Preventiva del agraviado, quien deberá acreditar la propiedad y preexistencia de los bienes que refiere le fueron sustraídos.
4. Se reciba la declaración Testimonial del personal policial interviniente.
5. Se prosiga con las investigaciones a fin de identificar y capturar a los demás sujetos partícipes del evento delictivo.
6. Se practique un examen psiquiátrico de perfil sexual al denunciado.
7. Y las demás diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos materia de la presente denuncia.

MEDIDA CAUTELAR:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 94 ° y siguiente del Código de Procedimientos Penales, solicito se trabé embargo en los bienes libres de la denunciada en la forma que estime conveniente la Judicatura a fin de asegurar el resarcimiento de la parte agraviada.

POR LO EXPUESTO:

Sírvase usted Señor Juez amparar la presente denuncia y darle el trámite que a su naturaleza corresponde.

OTROSIDIGO: Se pone a disposición de su Judicatura al denunciado HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA (19), en calidad de **DETENIDO**.

OTRISIDIGO: Asimismo a la presente denuncia no se le adjuntan ESPECIES.



Handwritten signature and initials in the top right corner.

OTRISIDIGO: La suscrita, se avoca al conocimiento de la presente denuncia por disposición Superior.

San Juan de Lurigancho, 09 de julio del 2012.



[Signature]
Melida Elizabeth Rodríguez Hidalgo
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL TITULAR
2da. Fiscalía Provincial Mixta - S.J.L.

PVRV/eyry

[Handwritten signature]

III. FOTOCOPIA DE AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN

Secretario: Rosa Conopuma

Expediente N° 16175-2012

Resolución N° 1

Lima, nueve de julio del año dos mil doce.-

AUTOS Y VISTOS:

La denuncia formalizada por la **Segunda Fiscalía Provincial Mixta de San Juan de Lurigancho**, acompañando como recaudo de la misma el Atestado Policial que antecede.

ATENDIENDO:

PRIMERO.- Que, se inculmina al inculpado **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA**, que con fecha 09 de julio del año 2012, a horas 00:30 aproximadamente, en circunstancias que la agraviada se encontraba transitando a la altura de la Avenida 13 de Enero y Jardines Este S.J.L, se aparecieron sorpresivamente cuatro sujetos desconocidos entre ellos el imputado **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA** (19), siendo que este último la sujeta del cuello (cogoteándola) hasta asfixiarla, mientras que los demás sujetos aprovechan para despojarle de su cartera que contenía sus llaves, documentos personales y la suma de S/ 80.00 nuevos soles, además

.....
 ROMULO AUGUSTO CHIRA CAPEZAS
 JUEZ TITULAR
 3º Juzgado Penal de Lima
 COTE SUPERIOR DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL

~~CONFIDENTIAL~~

28
Unidos

de una bolsa plástica conteniendo sus ropas personales, para luego darse a la fuga, pero antes de ello, el imputado hizo tocamientos indebidos en sus partes íntimas (seno) a la agraviada, momentos en que estos hechos son percatados por unos efectivos policiales que se encontraban por el lugar, quienes inmediatamente lograron capturar solo al denunciado a quien luego de ser sindicado y reconocido por la agraviada lo condujeron a la Comisaría del sector;

SEGUNDO.- Que, el suscrito considera luego del análisis de los recaudos aparejados a la denuncia del Titular de la Acción Penal, que los hechos descritos en la noticia criminal se encuadran dentro de los siguientes supuestos legales: Artículo 188° como tipo base, en concordancia con circunstancias agravantes contenidas en la primera parte del artículo 189°, incisos 2° y 4°, así como en el primer párrafo del artículo 176° del Código Penal vigente.

TERCERO.- Que, no habiendo prescrito la acción penal y estando individualizado su presunto autor debe abrirse instrucción de conformidad con lo estipulado en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, modificado por la Ley veintiocho mil ciento diecisiete.

PODER JUDICIAL

ROMULO AUGUSTO CHIRI CABEZAS
JUEZ TITULAR
nº Juzgado Penal de Lima
Poder Judicial de Lima

PODER JUDICIAL

CONDOMINIO GENEPROSO
Secretaría Judicial (o)
Penal de Turno Permanente
Poder Judicial de Lima

28
Unidad

de una bolsa plástica conteniendo sus ropas personales, para luego darse a la fuga, pero antes de ello, el imputado hizo tocamientos indebidos en sus partes intimas (seno) a la agraviada, momentos en que estos hechos son percatados por unos efectivos policiales que se encontraban por el lugar, quienes inmediatamente lograron capturar solo al denunciado a quien luego de ser sindicado y reconocido por la agraviada lo condujeron a la Comisaría del sector;

SEGUNDO.- Que, el suscrito considera luego del análisis de los recaudos aparejados a la denuncia del Titular de la Acción Penal, que los hechos descritos en la noticia criminal se encuadran dentro de los siguientes supuestos legales: Artículo 188° como tipo base, en concordancia con circunstancias agravantes contenidas en la primera parte del artículo 189°, incisos 2° y 4°, así como en el primer párrafo del artículo 176° del Código Penal vigente.

TERCERO.- Que, no habiendo prescrito la acción penal y estando individualizado su presunto autor debe abrirse instrucción de conformidad con lo estipulado en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, modificado por la Ley veintiocho mil ciento diecisiete.

PODER JUDICIAL

ROMULO AUGUSTO CHIRI CABEZAL
JUEZ TITULAR
1º Juzgado Penal de Lima
Poder Judicial de Lima

PODER JUDICIAL

ANTONIO PINO GENEEROSO
SECRETARIO JUDICIAL (a)
Juzgado Penal de Lima Permanente
Poder Judicial de Lima

los métodos Teleológico y Sistemático, considerando así que la suspensión de la vigencia de la Ley 29499 sólo está circunscrita a la aplicación de la Vigilancia Electrónica Personal, mas no, respecto a las modificatorias de las normas que no sean directamente contraproducentes con dicho tema, como lo son los requisitos concurrentes que debe tener en cuenta el Juez Penal para dictar mandato de detención, asimismo, dispone que siendo evidente que la vacación legal a que se hace referencia en la primera disposición final de la Ley 29499 está referida sólo a la aplicación de la Vigilancia Electrónica Personal, se interpreta que se encuentra vigente la modificatoria de la referida Ley respecto al artículo 135° CPP, a excepción de la parte in fine de su último párrafo.

En este sentido en cuanto a la medida de coerción a imponerse contra el encausado se ha evaluado lo siguiente:

Que existen elementos suficientes que vinculan al incoado con la comisión del hecho delictuoso denunciado; tales como: El Atestado N° 310-REG.POL-L-DIVTER-E1-SJL-CLH-DEINPOL (fojas 02 y siguientes) donde se relata el modo, la forma y circunstancias de la perpetración del ilícito y la intervención del incoado; asimismo obra la manifestación de la agraviada Diana Panta Fiestas (fojas 09), quien reconoce plenamente al imputado, como uno de los autores del robo y

PODER JUDICIAL
ROMULO AUGUSTO CHIPA CABEZAS
JUEZ TITULAR
9° Juzgado Penal de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PODER JUDICIAL

LAZARO ALVARO ALFARO ROSERO
FISCAL DE LA FISCALIA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

31
Tramite
que

tocamientos en su agravio, manifestando que él fue quien la coge del cuello asfixiándole, permitiendo que los demás sujetos sus cómplices, le roben su cartera, y luego darse a la fuga; **Acta de Registro Personal** (fojas 14), donde se deja constancia que al imputado se le incautó un cargador de celular color negro marca LG y un lapiz labial de propiedad de la agraviada; **Acta de Entrega** (fojas 18) donde se deja constancia de la devolución de las especies mencionadas a la agraviada; **la manifestación del propio imputado Hans Christopher Cesar Mayora** (fojas 10-13) quien en presencia del Representante del Ministerio Publico, acepta haber estado en el grupo de los sujetos que cometieron el acto ilícito en agravio de la agraviada, indicando que su participación fue solo estar en dicho lugar con sus amigos, "Burrito", "Temperamento" y "Bar" , indicando que los que robaron fueron sus amigos, para luego darse a la fuga, de quienes refiere desconocer sus nombres, apellidos, como así también sus domicilios, versión poco creíble que se presume lo brinde con la finalidad de evadir su responsabilidad penal; en todo caso, los hechos serán materia de una exhaustiva investigación, donde se deslindarán presuntas responsabilidades.

Que, haciéndose una prognosis de la probable pena a imponerse en caso de emitirse sentencia condenatoria, se tiene que la misma superaría los cuatro años de pena privativa de libertad, margen

RODOLFO AUGUSTO CHIRA CAZAR
JUEZ TITULAR
9º Juzgado Penal de Lima
Poder Judicial

PODER JUDICIAL

POSA... A 29 DE FEBRERO DE 2014

93/
Folios
12

de legalidad, pena probable y peligro procesal, deviene aplicable el artículo 135° del Código Procesal Penal.

En tal virtud, por las consideraciones precedentes y al amparo de las normas procesales glosadas,

SE RESUELVE:

ABRIR INSTRUCCIÓN en la vía **ORDINARIA** contra **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA**, como presunto autor de los delitos contra El Patrimonio — **ROBO AGRAVADO** y contra La Libertad Sexual - **ACTOS CONTRA EL PUDOR**, en agravio de Diana Panta Fiestas; dictándose en contra del procesado **MANDATO DE DETENCION**.

DILIGENCIAS A EFECTUARSE:

Habiendo sido puesto a disposición del Juzgado el inculcado, Recíbasele en el día su declaración Instructiva, recábese sus antecedentes penales y judiciales, asimismo Admitase a trámite las diligencias solicitadas por el Representante del Ministerio Público las cuales deberán ser programadas oportunamente en el Juzgado de trámite y absuélvanse las citas que resulten de autos y practíquense las demás diligencias que sean necesarias para un mejor esclarecimiento de los hechos. Por otro lado, habiéndose dictado

PODER JUDICIAL
R. ROMULO AUGUSTO CHIRIA CAPEZAS
JUEZ TITULAR
9° Juzgado Penal de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PODER JUDICIAL

ROSARIO GONZALEZ GONZALEZ

34
Trufo
Cuo

mandato de detención contra el encausado, existiendo suficientes elementos del hecho incriminado y a fin de garantizar el eventual pago de la reparación civil, de conformidad con lo dispuesto por el artículo noventa y cuatro del Código de Procedimientos Penales: **TRABESE** embargo preventivo sobre los bienes del inculcado que sean suficientes para cubrir la reparación civil; notificándosele para que señale bienes libres sobre los que debe recaer la medida, bajo apercibimiento de trabarse embargo sobre los que se sepa son de su propiedad; sin perjuicio de pedirse mediante oficio informe al Registro de la Propiedad Inmueble sobre los inmuebles inscritos a nombre del procesado, al Registro de la Propiedad Vehicular sobre los vehículos inscritos a nombre del encausado y a las entidades del sistema bancario y financiero del país sobre las cuentas corrientes y de ahorros a nombre del inculcado; formándose el cuaderno de embargo con copia certificada del presente auto; **al primer otrosí**: Estése a lo resuelto en la fecha; **al segundo y tercer otrosí**: Téngase presente; comunicándose la apertura de instrucción y el mandato de detención a la Sala Penal competente, con citación del representante del Ministerio

Público.-

PODER JUDICIAL

Dr. ROMULO AUGUSTO CHIRA CABEZAS
JUEZ TITULAR
9º Juzgado Penal de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PODER JUDICIAL

Dr. CONOPLA GENEZOSO
SECRETAR JUDICIAL (e)
Penal de Trufo Permanente
MINISTERIO DE JUSTICIA DE LIMA

IV. SÍNTESIS DE LA INSTRUCTIVA Y PREVENTIVA

- DECLARACIÓN INSTRUCTIVA:

El denunciado HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA en su declaración instructiva de fecha 31 de julio del 2012, que se considera involucrado, ya que estaba reunido con las personas que cometieron el delito.

El procesado acepta haber estado en el grupo de los sujetos que cometieron el acto ilícito en agravio de Diana Panta Fiestas, señalando que su participación fue solo estar en dicho lugar con sus amigos : "Brayan Cherres " le dicen Temperamento, y "Asley" le dicen burrito, y el que le robaron fueron sus amigos, para luego darse a la fuga, siendo intervenido posteriormente por personal policial.

- DECLARACIÓN PREVENTIVA:

No se recibió la Declaración Preventiva de la agraviada Diana Panta Fiestas. Sin embargo a nivel policial señala que reconoce al procesado HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA como uno de los cuatro persona que la asaltaron y le robaron su cartera.


V. PRINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS:


Entre las principales pruebas actuadas tenemos el Protocolo de Pericia Psicológica N°049985-2012-PSC y Evaluación Psiquiátrica N°050498-2012-PSQ practicado al procesado HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA.

Asimismo, el Certificado Judicial de Antecedentes Penales y Certificado de Antecedentes Judiciales al procesado HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA.

VI. FOTOCOPIA DE:

VI.1. ACUSACIÓN FISCAL




MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
10° FSPL

Expediente N° 16175-2012.
Dictamen N° - 2013.
 284

Señor Presidente:

Viene a ésta Fiscalía Superior en lo Penal, a fs. 150, el proceso con reo en cárcel, por delito contra El Patrimonio – Robo Agravado y contra La Libertad Sexual – Actos contra El Pudor, en agravio de Diana Panta Fiestas; para los efectos de emitir el pronunciamiento de ley.

De los actuados se tiene que en ésta causa.

HAY MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra:

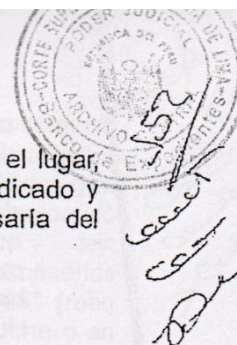
HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA (reo en cárcel), de nacionalidad Peruana, natural de Lima, con 19 años de edad, consignado así en su declaración instructiva de fs. 35, con documento nacional de identidad N° 47972612 soltero, sin hijos, de ocupación como ayudante de confección textil, con domicilio en el Jr. Augusto Aguirre N° 3538 – San Juan de Lurigancho, no registra antecedentes penales.

HECHOS:

Se tiene que con fecha nueve de Julio del dos mil doce, a las 00:30 horas aproximadamente, en circunstancias que la agraviada se encontraba transitando a la altura de la Av. 13 de Enero y Jardines Este en el distrito de San Juan de Lurigancho, aparecieron sorpresivamente cuatro sujetos entre ellos el denunciado **Hans Christopher César Mayorca** quien la sujetó del cuello cogoteándola hasta hacerla perder el conocimiento, mientras que los demás sujetos aprovecharon para despojarle de su cartera conteniendo sus llaves. Documentos personales y la suma de S/. 80.00 nuevos soles, además de una bolsa plástica con su ropa, luego se dieron a la fuga; que el denunciado aprovechó esta circunstancia para realizarle tocamientos indebidos en sus partes íntimas (senos) en forma libidinosa; hechos que fueron

TEDDY EDGARDO CORTES VARGAS
 Fiscal Superior
 10° Fiscalía Superior en lo Penal de Lima

presenciados por efectivos policiales que se encontraban por el lugar, quienes inmediatamente lograron capturar al denunciado sindicado y reconocido por la agraviada siendo conducidos a la Comisaría del sector para las investigaciones correspondientes.



DILIGENCIAS ACTUADAS:

Ahora bien el delito contra El Patrimonio – Robo Agravado y contra La Libertad Sexual - Actos contra el Pudor, se encuentran acreditados, así como comprometida la responsabilidad penal de Hans Christopher; en mérito de las siguientes instrumentales:

A fs. 05 obra la manifestación de **DIANA PANTA FIESTAS**, refiriendo que el día de los hechos a las 00:30 horas aproximadamente se encontraba caminando con dirección a su domicilio por el cruce de la Av. Los Jardines con la Av. 13 de Enero en San Juan de Lurigancho y de pronto cuatro sujetos desconocidos se le acercaron, uno de ellos le cogió por detrás del cuello hasta desmayarla, mientras sus cómplices le arracharon la cartera y la bolsa plástica con su ropa, manoseándole además sus pechos, el sujeto la tenía cogida del cuello, y luego huyeron los cuatro con su cartera, conteniendo su dinero, llaves y cosméticos, y al solicitar apoyo policial logró identificar al sujeto que le cogió del cuello el mismo que fue intervenido y llevado a la Comisaría; que la persona que se le muestra a la vista y responde al nombre de **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA** es uno de los cuatro sujetos que la asaltaron y le robaron su cartera con sus bienes, y esta persona fue quien le agarró del cuello hasta asfixiarle, mientras, sus cómplices le robaban, asimismo esta persona le manoseo sus pechos (sic), es así que al intervenido le encontraron su cargador, lápiz labial en su poder (sic).

A fs. 14 obra Acta de Registro Personal efectuado a **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA**, hallándose en su poder 01 cargador de celular color negro y 01 lápiz labial.

Que respecto a los cargos:

A fs. 35 se tiene la declaración instructiva de **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA**, continuada a fs. 53 – 58/63, refiere que se considera involucrado en los hechos ya que estuvo reunido con las personas que cometieron el delito; que el día de los hechos estuvo peleando con unos pandilleros a tres cuadras de la tienda Metro de San Juan luego se quedó en ese lugar hasta que llegó una pareja donde ella era la agraviada y su amigo "Asley" le arrebató su

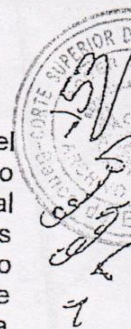
TEDDY-EDGARDO CORTES VARGAS
Fiscal Superior
10ª Fiscalía Superior en lo Penal de Lima

cartera, que "Brayan" y un chico de apodo "Bart" corrieron con él y el declarante igualmente lo hizo y en el camino mientras corrían su amigo "Asley" comenzó a repartir las cosas que había dentro de la cartera y al declarante le entregó un cargador de celular y un lápiz labial mientras que los demás también se repartían las otras cosas y mientras estuvo miccionando llegó un policía y lo detuvo para eso sus amigos ya se habían ido del lugar por lo que lo llevaron a la Comisaría de la Huayrona; que él estuvo como a cinco metros de la agraviada y no la agarró para nada, si es uno de los cuatro pero no le arranchó la cartera ni la ha ahorcado, es mentira que le haya querido asfixiarla y no le agarró los pechos, que no se dedica al asalto y robo de personas, que la cartera se la llevó "Asley" y no hubo dinero ni celular, después de lo ocurrido volvió a ver a la agraviada en la Comisaría y ahí lo reconoció como la persona que la cogoteó y agarró los senos, lo cual es mentira, que es la primera vez que está en un penal y se encuentra arrepentido de los hechos (sic).

De todo lo precedente, con relación a la responsabilidad penal en el delito de robo agravado y actos contra el pudor de HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA, ha quedado comprometida, pues ha sido sindicado y reconocido plenamente por la agraviada, quien ha narrado en forma detallada los acontecimientos en su agravio, refiriendo que es uno de los cuatro sujetos que le asaltaron y le robaron su cartera con sus bienes, y lo sindica como la persona que la cogió del cuello hasta asfixiarle, mientras sus cómplices le robaban, así mismo refiere fue éste que le realizó tocamientos indebidos en sus partes íntimas como son sus senos, agregando que éste cuando fue intervenido le encontraron en su poder un cargador de celular y un lápiz labial de su pertenencia, lo que se corrobora con el Acta de Registro Personal efectuado al imputado y que obra a fs. 14; por otro lado se tiene que el imputado ha negado los cargos que se le atribuyen y refiere considerarse "involucrado" en los hechos ya que estuvo reunido con las personas que cometieron el delito, pero que él no cogoteo ni tocó a la agraviada; sin embargo ésta ha referido lo contrario que la negativa del inculcado ante tal sindicación debe tomarse como argumentos de defensa; pues a fs. 68/70 se tiene además el Protocolo de Pericia Psicológica N° 049985-2012-PSC efectuado a Hans Christopher César Mayorca, cuyas conclusiones son: "*conciencia y voluntad plena, rasgos de personalidad tipo disocial*" (sic); y la Evaluación Psiquiátrica N° 050498-2012-PSQ igualmente efectuado al imputado, cuyas conclusiones son: "*personalidad con rasgos inmaduros y disociales, inteligencia normal promedio, no psicosis*" (sic).

Que, la conducta del inculcado refleja el actuar de estos sujetos que se dedican a robar en las calles de Lima, sorprendiendo en forma cobarde a una mujer a quien luego de somterla a una agresión física violenta, proceden a robarle el poco patrimonio que pueda llevar y en forma abusiva, César Mayorca, haciendo gala supuestamente de su

TEDDY EDGARDO CORTEZ VARELA
Fiscal Superior
10° Fiscalía Superior en lo Penal de Lima



"hombria" procede a manosearla satisfaciéndose libidinosamente incurriendo en responsabilidad penal por el delito de tocamientos indebidos a una mujer, quien quedará con secuelas y carga psicológica negativa por lo ocurrido; por lo que corresponde sea sancionado conforme dispone la ley; por tanto se reúnen los elementos objetivos y subjetivos necesarios para configurar el ilícito previsto y sancionado en el Art. 188° (robo agravado), con las agravantes de los incisos 2 (durante la noche o en lugar desolado) y 4 (con el concurso de dos o más personas) del primer párrafo del Art. 189° y Art. 176° primer párrafo (actos contra el pudor: el que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170° con violencia o grave amenaza, realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar sobre sí misma o sobre tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años...) del Código Penal; toda vez que está acreditado el robo agravado y actos contra el pudor, toda vez que éste último delito es un acto independiente del robo en que se sanciona el despojo del patrimonio, que no tiene nada que ver con manoseos o tocamientos deshonestos buscando agregar al beneficio patrimonial la satisfacción corporal dirigido a buscar satisfacción sexual, atentando contra la libertad de la víctima, ya que la víctima lo sindicó sin ninguna duda como su agresor.

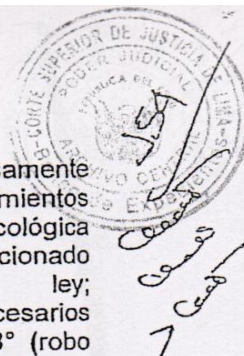
Que en este caso es de aplicación igualmente el Artículo 50° del Código Penal, que prescribe: *"Cuando concurren varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente ésta" (sic).*

Considerando el Ministerio Público que la suma de Dos Mil nuevos soles, resulta prudente para reparar el daño material y psicológico ocasionado a la agraviada; que deberá ser pagado por el autor.

ACUSACIÓN, PENA Y REPARACIÓN CIVIL

Por consiguiente, al estar acreditada la comisión del delito materia de instrucción, y latente la responsabilidad penal del encausado, ésta Fiscalía Superior en lo Penal de Lima, en mérito a las facultades conferidas por el Art. 92° del Decreto Legislativo N° 052-Ley Orgánica del Ministerio Público – y de conformidad con lo establecido en los Art. 11, 12, 23, 45, 46, 50, 92, 93, 188 como tipo base, con las agravantes de los incisos 2 y 4 del primer párrafo del Art. 189°, 176° primer párrafo del Código Penal; **FORMULA ACUSACIÓN**

TEDDY EDGARDO CORTÉZ VARELA
Fiscal Superior
10° Fiscalía Superior en lo Penal de Lima



SUSTANCIAL contra: **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA**, por delito contra el Patrimonio - Robo Agravado; y por delito contra La Libertad Sexual - Actos contra El Pudor, en agravio de Diana Panta Fiestas; solicitando se le imponga **DIECISIETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**; y al pago por concepto de reparación civil de **DOS MIL NUEVOS SOLES** a favor de la víctima, en la forma antes descrita.

INSTRUCCIÓN: Regularmente llevada.

AUDIENCIA: Con la presencia de la agraviada, quien deberá indicar ante el pleno todos los acontecimientos ocurridos en su contra; con la presencia del Cap. PNP Carlos A. Padilla Susanibar y del efectivo policial SOB PNP Raúl Barreto Sotomayor, a fin de narrar las incidencias del caso.

No he conferenciado con Hans Christopher César Mayorca, quien tiene la condición de reo en cárcel, según el Informe Final de fs. 136/137.

OTROSI DIGO: Se adjunta 01 cuaderno de embargo a fs. 27.

TCV/zmc

Lima, 05 de Abril del 2013.



TEDDY EDGARDO CORTÉZ VARGAS
Fiscal Superior
10° Fiscalía Superior en lo Penal de Lima



VI.2. AUTO DE ENJUCIAMIENTO.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA PENAL ESPECIALIZADA PARA
PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL

S.S. EGOAVIL ABAD
PEÑA BERNAOLA
 YNOÑAN VILLANUEVA

RESOLUCION No. 739

EXP. N° 16175-2012-0
 Resolución N°

Lima, trece de junio
 Del año dos mil doce.-

AUTOS Y VISTOS: Interviniendo como Ponente el señor **Juez Superior Peña Bernaola**, sin informe oral tal como se aprecia de la constancia emitida por relatoría; y, **CONSIDERANDO: Primero:** Que, es materia de análisis el dictamen fiscal que obra de fojas ciento cincuenta y uno a ciento cincuenta y cinco en la cual se formula acusación contra **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA (reo en cárcel)** por la comisión del delito contra el Patrimonio **-Robo Agravado-**, y por delito contra la Libertad Sexual **-Actos Contra el Pudor-**, conductas contenidas en el artículo 188° (tipo base) con las circunstancias agravantes de los incisos 2 y 4 del primer párrafo del artículo 189° **-Robo Agravado-**, así como lo estipulado en el primer párrafo del artículo 176° **-Actos Contra el Pudor-** del Código Penal vigente; **Segundo:** : Que, se ha corrido traslado de la Acusación Fiscal a las partes por el plazo de tres días, conforme se desprende de los cargos de notificación que obran en autos. Vencido dicho plazo y al no haber las partes procesales presentado sus alegatos de defensa, se tiene que el presente

proceso a quedado expedito para emitir el auto de enjuiciamiento pertinente; **Tercero:** Que, es menester señalar que conforme el V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias – Acuerdo Plenario N° 06-2009/CJ-116, respecto del asunto: Control de Acusación Fiscal, se establece en el numeral 9°, que: “Como todo acto postulatorio, mas aún cuando constituye la base y el límite del juicio oral, la acusación fiscal, en cuanto debe cumplir determinados requisitos subjetivos y objetivos legalmente previstos, está sujeta al control jurisdiccional. El marco de control, sin embargo, sólo debe incidir en aquellos aspectos circunscriptos a los juicios de **admisibilidad y procedencia**, sin que sea dable realizar análisis probatorio alguno ni emitir pronunciamiento sobre el fondo, salvo expresa autorización legal y en la medida que no genere indefensión material en perjuicio del acusador. El control como corresponde, debe realizarse sin mengua del principio de contradicción y de la garantía de tutela jurisdiccional; en ese sentido se advierte del dictamen acusatorio que el señor Fiscal Superior ha cumplido con lo establecido en el artículo 225° del CPP y con lo estipulado por la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 92°, inciso 4), esto es haber identificado a los imputados quienes han sido comprendidos en sede de instrucción. Desde la perspectiva objetiva, se ha cumplido con la fundamentación fáctica – artículos pertinentes del Código Penal, monto de la indemnización civil, ofrecimiento de medios de prueba – así también, se ha descrito el modo preciso, concreto y claro de los hechos atribuidos a los imputados, en consecuencia;
DECLARARON HABER MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA** por el delito contra el Patrimonio –**Robo Agravado**–, y por delito contra la

169

Libertad Sexual -Actos Contra el Pudor-, en agravio de Diana Santa Fiestas; **DESIGNARON** como defensor de oficio de los acusados al doctor Jaime Agustín Paez Janampa; sin perjuicio de los designados en autos; **SEÑALARON**: fecha y hora para la verificación del acto oral, el día **MARTES VEINTITRÉS** de **JULIO** del año en curso, a horas NUEVE Y CINCO minutos de la mañana, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario Lurigancho (Ex San Pedro); **ORDENARON**: se **OFICIE** al Señor Director del referido Establecimiento Penitenciario para el traslado oportuno de los procesados en cárcel, a la Sala de Audiencias de dicho penal; asimismo **OFÍCIESE** al Instituto Nacional Penitenciario poniéndose en conocimiento que el procesado reo en cárcel queda a disposición de esta Superior Sala Penal, así como la medida coercitiva ordenada en su contra (**Detención ver fojas treinta y seis**); **MANDARON**: Recabar los **antecedentes penales y judiciales actualizados** del procesado; asimismo, estando a lo solicitado por el señor Fiscal Superior, sobre la concurrencia de la agraviada, así como de los efectivos policiales intervinientes; **CÍTESE** oportunamente conforme lo disponga la Sala, **oficiándose** a la oficina de Personal de la Policía Nacional a fin de que informe la dependencia donde laboran dichos miembros de la Policía, para efectos de la notificación; **CUMPLA** el escribano diligenciero con adjuntar los cargos y respuestas de la verificación del presente mandato; notificándose y oficiándose.

REC. 4 JUN 2013
19:14 JUN 2013

PODER JUDICIAL

Dra. Karim J. Cossilla Gachay
SECRETARÍA DE SALA
4º Sala Penal con Jefe de Sala
Calle 1000, Lima 1

VII. SÍNTESIS DEL JUICIO ORAL:

Se da inicio con fecha 23 de julio del 2013 la Audiencia Pública en el proceso penal contra HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA por Delito contra el Patrimonio – Robo Agravado, y por el Delito contra la Libertad Sexual –Actos contra el Pudor en agravio de DIANA PANTA FIESTAS, en la cual el acusado ha manifestado su voluntad de acogerse a la institución de la Conclusión Anticipada de Juzgamiento previsto en la Ley N° 28,122.

Se resolvió CONDENAR a HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA como AUTOR del delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, y por el Delito contra la Libertad Sexual –Actos contra el Pudor en agravio de DIANA PANTA FIESTAS, condenándolo a CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD la misma que computada desde el 09.07.2012 vencerá el 08.07.2016, FIJÁNDOSE en la suma de MIL NUEVOS SOLES el monto de REPARACIÓN CIVIL que deberá abonar en favor de la agraviada.

VIII. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR

174
cint. número

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA PENAL PARA PROCESOS CON
REOS EN CARCEL**

Exp. 16175-12

DD. EGOAVIL ABAD

SENTENCIA POR CONCLUSION ANTICIPADA DEL JUZGAMIENTO

Lima, veintitrés de julio
del año dos mil trece.-

VISTOS: En Audiencia Pública el proceso penal seguido contra **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA** por delito contra el Patrimonio -ROBO AGRAVADO y por delito contra la Libertad Sexual -ACTOS CONTRA EL PUDOR en agravio de DIANA PANTA FIESTAS, en la cual el acusado ha manifestado su voluntad de acogerse a la institución de la **Conclusión Anticipada del Juzgamiento** prevista en la Ley veintiocho mil ciento veintidós.

RESULTA DE AUTOS: El proceso se inició con el Atestado Policial que corre de fojas 02 y siguientes, la Fiscalía Provincial Penal formalizó denuncia a fojas 22, dictando el Juzgado Penal el Auto de apertura de Instrucción de fecha 09 de julio del 2012, que corre a fojas 27, luego de lo cual se desarrolló la causa conforme a su naturaleza ordinaria correspondiente. Concluida la investigación, a fojas 151 el Ministerio Público formuló la acusación Fiscal pertinente, en mérito a la cual, se dictó el Auto Superior de Enjuiciamiento, y estando a qué se

[Firma] 1

ha instalado la Audiencia Pública, conforme se aprecia de las actas respectivas, habiéndose acogido el acusado **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA** a los alcances de la Ley veintiocho mil ciento veintidós, la causa ha quedado expedita para dictar sentencia atendiendo a lo siguiente:

ANTECEDENTES:

CARGOS DE LA ACUSACION:

1. HECHOS:

Se imputa al acusado que el 09-07-2012 aproximadamente a las 00.30 horas cuando la agraviada se desplazaba a la altura de la avenida 13 DE ENERO y JARDINES ESTE -SAN JUAN DE LURIGANCHO, aparecen cuatro sujetos entre ellos el acusado quien la sujeta del cuello y le hace perder el conocimiento, mientras que los demás sujetos la despojaron de su cartera conteniendo sus llaves, documentos personales y la suma de 80 nuevos soles así como una bolsa plástica con su ropa, dándose luego a la fuga, siendo que el acusado aprovecha estas circunstancias para realizarle tocamientos indebidos a la agraviada en sus partes íntimas (senos) en forma libidinosa, hechos que fueron presenciados por efectivos policiales que se encontraban por el lugar, quienes inmediatamente lograron capturar al acusado siendo reconocido por la agraviada.

2. TIPO LEGAL POR EL QUE SE ACUSA:

Estando a la conducta imputada, ésta se adecua al tipo penal prescrito en el artículo ciento ochentiocho como tipo base, con las agravantes previstas en los incisos segundo y cuarto del primer párrafo del artículo ciento ochentinueve del Código Penal, bajo el nomen juris de delito contra el Patrimonio -ROBO AGRAVADO, así como en el primer párrafo del artículo 176 del

175
C/200
n/2000

citado Código Penal bajo el nomen juris de delito contra la Libertad Sexual –ACTOS CONTRA EL PUDOR, adecuándose por tal el hecho instruido a la descripción que de éste se hace en la ley penal.

3. POSICION DEL IMPUTADO FRENTE A LA ACUSACIÓN.

Que, al instalarse el juicio oral el acusado **CESAR MAYORCA** aceptó su participación en los hechos y manifestó su voluntad de acogerse a la institución de la **Conclusión Anticipada del Juzgamiento**, prevista y establecida en la **Ley veintiocho mil ciento veintidós**, expresando su conformidad con los términos de la acusación fiscal. La conformidad expresada por el procesado fue previamente consultada con su abogado defensor quien ratificó lo manifestado por su patrocinado y alegó en favor del mismo la mejor consideración de la Sala en beneficio de su defendido, porque se encuentra arrepentido.

4. ACEPTACION DE LOS CARGOS ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116.

La conformidad manifestada por el acusado **CESAR MAYORCA** comprende la aceptación de los hechos materia de acusación, responsabilidad penal, pena y reparación civil; es decir, la declaración de culpabilidad del imputado no se limita al hecho, sino que también alcanza a las consecuencias jurídicas del delito (**conformidad absoluta**) por lo que se cumplen los presupuestos necesarios para su procedencia establecidos en el ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116, acorde con lo prescrito en el artículo 5° de la Ley número 28122.

5. DEL DAÑO CAUSADO A LA VICTIMA Y SU REPARACION:

Para efectos de fijar la reparación civil se tiene en consideración el daño sufrido por la parte agraviada estando a que la

agraviada solo pudo recuperar parte de sus pertenencias robadas las que fueron halladas en poder del acusado CESAR MAYORCA, aunado a que el hecho se produjo durante la noche y con pluralidad de atacantes y con el concurso del delito de tocamientos indebidos en sus partes intimas contra la agraviada.

6. DETERMINACION DE LA SANCION PENAL A IMPONERSE:

Que, para efectos de la graduación de la pena a imponérsele al encausado, debe considerarse los extremos de la **conminación penal** para el delito y el pedido de pena formulado en la acusación fiscal, a fin de proceder a determinar la **pena básica** para el delito y a continuación establecer la **pena concreta** a imponer al acusado, debiendo asimismo valorarse cada una de las circunstancias, especiales o genéricas, cualificadas o atenuantes que concurren periféricamente con la conducta delictiva, en concordancia con los presupuestos necesarios para la fundamentación, determinación e individualización judicial de la pena contenidos en los artículos 45 y 46 del Código Penal, por lo que se tiene en cuenta:

En primer lugar: El Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad de la pena consagrado en el numeral ocho del Título Preliminar del Código Penal; estando a que la agraviada solo pudo recuperar parte de sus pertenencias robadas las que fueron halladas en poder del acusado CESAR MAYORCA, aunado a que el hecho se produjo durante la noche y con pluralidad de atacantes y con el concurso del delito de tocamientos indebidos en sus partes intimas contra la agraviada.

176
cum
nisi

En segundo lugar: La condición socio económica del encausado, de la que pueda deducirse que éste sufre carencias sociales que pudieron haber influido en su determinación criminal, estando a que el inculcado ha declarado en su Instructiva ser de ocupación ayudante de confección textil, por lo que se colige que se trata de una persona sin mayores recursos económicos, circunstancia **genérica** que constituye un indicio de su situación social y que pudo llevarlo a delinquir.

En tercer lugar: Que, el encausado en el juicio oral, acepta acogerse a la Conclusión Anticipada de los debates orales admitiendo los cargos, por lo que le corresponde el beneficio de la rebaja **de un séptimo** de la pena concreta a imponer en interpretación analógica del artículo 471 del Nuevo Código Procesal Penal y en concordancia con lo señalado en el **ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116** (parágrafo 06-párrafo 23).

En cuarto lugar: el acusado **NO** registra antecedentes penales anteriores conforme fojas 121, siendo asimismo que éste es su primer ingreso a un centro penitenciario conforme folios 122, situación que tomará en cuenta este Colegiado; **asimismo, el acusado tenía menos de 21 años a la fecha de los hechos conforme ficha de RENIEC a folios 21, por lo que le alcanza la responsabilidad restringida prevista en el artículo 22 del Código Penal.**

DECISION:

Por los fundamentos antes expuestos y en aplicación lo dispuesto en los artículos **22**, veintitrés, cuarenticinco, cuarentiseis, noventidós,

noventitrés, **188 como tipo base** así como en los **incisos 2 y 4** del primer párrafo del **artículo 189**, y el **primer párrafo del artículo 176** del Código Penal, así como los artículos **doscientos ochenta y doscientos ochenticinco** del Código de Procedimientos Penales y el artículo quinto de la **Ley veintiocho mil ciento veintidós**, los miembros de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de Lima, apreciando los hechos con el criterio de conciencia que la Ley faculta e impartiendo Justicia a nombre de la Nación:

RESOLVIERON:

CONDENAR a **HANS CHRISTOPHER CESAR MAYORCA** como **AUTOR** del delito contra el Patrimonio -**ROBO AGRAVADO** y por delito contra la Libertad Sexual -**ACTOS CONTRA EL PUDOR**, **ambos** en agravio de **DIANA PANTA FIESTAS**.

LE IMPUSIERON: **CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**, la misma que computada desde el **09-07-2012** vencerá el **08-07-2016**.

FIJARON: en la suma de **MIL NUEVOS SOLES** el monto de la **REPARACIÓN CIVIL** que deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada.

MANDARON: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia se cursen los **TESTIMONIOS DE CONDENAS** donde corresponda. **ARCHIVÁNDOSE** el proceso en la forma y modo de ley, con conocimiento de Juzgado de origen.

S.S.


EGOAVILABAD
PRESIDENTE Y D.D.

YNONAN VILLANUEVA
JUEZ SUPERIOR

PEÑA BERNAOLA
JUEZ SUPERIOR

IX. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA; DE JUSTICIA DEL PERÚ.

205
dieciséis
cero



**CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA**

**SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N.º 2852-2013
LIMA**

Lima, quince de octubre de dos mil trece

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia de folios ciento setenta y cuatro, del veintitrés de julio de dos mil trece, que condenó a **HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA** por los delitos contra el Patrimonio-robo agravado y contra la Libertad Sexual-actos contra el pudor, en agravio de Diana Panta Fiestas, a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, y fijó en mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la agraviada.

Interviene como ponente el señor Príncipe Trujillo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Ministerio Público, en su recurso formalizado de folios ciento ochenta y cinco, sostiene que: i) No se aplicó la sumatoria de penas del artículo cincuenta que solicitó el acusador, ni se tomó en cuenta que el hecho se realizó entre varias personas. ii) No se fijó la pena concreta, para luego reducirla conforme con el Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho de julio de dos mil ocho.

SEGUNDO. Conforme con la acusación fiscal, de folios ciento cincuenta y uno, los hechos imputados al acusado se produjeron el nueve de julio de dos mil doce, aproximadamente a las cero horas con treinta minutos, cuando la agraviada se desplazaba a la altura del cruce de las avenidas Trece de Enero y Jardines Este,

I



CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N.º 2852-2013
LIMA

de San Juan de Lurigancho. En esos momentos aparecieron cuatro sujetos, entre ellos el procesado, quien la sujetó del cuello y le hizo perder el conocimiento, mientras que los demás sujetos la despojaron de su cartera, que contenía la suma de ochenta nuevos soles; así como de una bolsa plástica en la que se encontraba su ropa, luego los sujetos fugaron del lugar. Paralelamente a estos hechos, el procesado aprovechó para realizarle tocamientos indebidos en los senos a la agraviada, en forma libidinosa; hechos que fueron presenciados por los efectivos policiales que se encontraban en el lugar, quienes inmediatamente lograron capturar al acusado.

TERCERO. Frente a dicha imputación, expuesta suscintamente por el Fiscal Superior en audiencia pública, el encausado **HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA** se acogió a lo previsto en el artículo cinco de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós; por lo que admitió plenamente los cargos formulados por el representante del Ministerio Público, y aceptó ser autor del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil solicitada por el fiscal; decisión libre e informada que se afianzó con la garantía de la plena conformidad de su abogado defensor (conocida como bilateralidad).

CUARTO. En cuanto a los agravios planteados por el Ministerio Público, respecto al *quantum* de la pena impuesta al procesado, debe precisarse que la formal aceptación unilateral, voluntaria e informada de los hechos por parte del procesado, con la conformidad de su abogado defensor —como se advierte en el



CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N.º 2852-2013
LIMA

presente caso-, presupone la renuncia a la actividad probatoria propia de un juicio oral —única etapa que por sus garantías habilita la formación de la prueba a valorar-, como acto dispositivo del imputado —sobre la base del principio de adhesión-. Por lo tanto, los hechos convenidos por el Fiscal Superior y el acusado, vincularon de forma absoluta al Tribunal Superior —*vinculatio facti*-, que deberá tenerlos como realmente acontecidos, por lo que las partes —por propio efecto del consentimiento- no tienen la posibilidad de cuestionarlos recursalmente. En tal virtud, se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad penal del procesado; sin embargo, debe analizarse si la pena impuesta fue adecuada a la gravedad de los hechos, e impuesta en función a los otros criterios que informan el *quantum* de la pena.

QUINTO. Respecto al *quantum* de la pena impuesta al acusado **HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA**, cabe anotar que para la dosificación punitiva o para los efectos de imponer una sanción penal, el legislador ha establecido las clases de pena y el *quantum* de estas; por consiguiente, se encuentran normados los criterios necesarios para que el juzgador pueda individualizar judicialmente la pena y concretarla. Dentro de este contexto, debe observarse el principio de proporcionalidad, que nos conduce a establecer el daño y la trascendencia de la acción desarrollada por el agente culpable, bajo el criterio de la individualización y cuantificación de la gravedad del delito, su modo de ejecución, el peligro ocasionado y la personalidad o capacidad del imputado —conforme lo dispone el artículo cuarenta y seis del Código Penal-. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta la forma y



**CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA**

**SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N.º 2852-2013
LIMA**

circunstancias de la comisión de los delitos imputados al procesado, los que en su conjunto revisten gravedad, debido a la forma particularmente insidiosa con la que actuó el encausado, a fin de lograr su deleznable cometido; pues no solo ejerció violencia física en contra de la agraviada para despojarla de sus pertenencias, sino que, además, aprovechó su indefensión para realizarle tocamientos libidinosos en los pechos, lo que obviamente causó daño psicológico adicional a la agraviada, sumado al causado por la violencia física que tuvo que sufrir. Por lo que, en atención al *quantum* de la pena impuesta, se observa que esta fue indulgente y no respondió a la gravedad de los hechos materia de juzgamiento; por lo que, tomando en cuenta que el representante del Ministerio Público impugnó la recurrida y cuestionó la pena impuesta, resulta aplicable lo dispuesto en el inciso tres, del artículo trescientos, del Código de Procedimientos Penales; pues esta no corresponde a las circunstancias de la comisión de los delitos imputados al procesado. En consecuencia, en atención a las consideraciones que preceden los agravios, que alega el recurrente, resultan atendibles, por lo que se elevará la pena prudencialmente, en consideración de los principios de lesividad, proporcionalidad y los fines de la pena, previstos en los artículos cuatro, ocho y nueve, respectivamente, del Título Preliminar del Código Penal; criterios que armonizan con los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, contemplados en el artículo octavo, del Título Preliminar, del Código Penal.



CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N.º 2852-2013
LIMA

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, declararon: I. **HABER NULIDAD** en la sentencia de folios ciento setenta y cuatro, del veintitrés de julio de dos mil trece, en el extremo que impuso cuatro años de pena privativa de la libertad a **HANS CHRISTOPHER CÉSAR MAYORCA**, como autor de los delitos contra el Patrimonio-robo agravado y contra la Libertad Sexual-actos contra el pudor, en agravio de Diana Panta Fiestas. **REFORMÁNDOLA: le IMPUSIERON OCHO AÑOS** de pena privativa de la libertad. Pena que computada desde el nueve de julio de dos mil doce, vencerá el ocho de julio de dos mil veinte. II. **NO HABER NULIDAD** en lo demás que contiene. Y los devolvieron. Intervienen los señores jueces supremos Neyra Flores y Morales Parraguez, por licencia de los señores San Martín Castro y Salas Arenas, respectivamente.

S. S.

PRADO SALDARRIAGA

RODRÍGUEZ TINEO

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

MORALES PARRAGUEZ

PT/ Imfrí

SE PUBLICO CONFORME A LEY

Diny Yurianiéva Chávez Veramendi
Secretaria (c)
Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA

18 JUL 2014
18 JUN. 2014
11 122 2014

X. DIEZ JURISPRUDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS CON INDICACIÓN DE LA SUMILLA DE EXPEDIENTE QUE HUBIERAN SIDO RESUELTOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y COMPETENTE CON LA INDICACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU NÚMERO, Y EL AÑO SISTEMA PROCESAL MIXTO.

1. Sentencia de la Corte Suprema

Sala Penal Transitoria Suprema del Perú

Recurso de Nulidad N°000583-2019

07/09/2021

Delito: Robo Agravado Art. 189

Sumilla:

La sucesión de leyes en el tiempo activa el principio de favorabilidad al recurrente en aplicación del numeral 11, del artículo 139, de la Constitución Política, así como el artículo 6 del Código Penal. En el caso de conflicto de leyes en el tiempo, se aplicará la más favorable al procesado. Por tanto, se constata que la norma más favorable es la determinada por la Ley N.º 30076, lo que exige que además de pertenecer a una organización criminal debe ocasionar con su accionar la muerte o lesiones graves en la víctima. Ocurre que en este caso no se dan tales presupuestos pues el hecho de robo agravado se realizó bajo el concurso de dos o más personas, y no se atribuye la pertenencia a una organización criminal. En este caso, nos encontramos ante el supuesto de una ley penal intermedia que fue promulgada y entró en vigencia después de la comisión del delito. Luego fue modificada y reemplazada por la Ley N.º 30077 incluso antes que se dicte la condena del recurrente. En esa dirección la ley intermedia se aplica

retroactivamente por ser más benigna; además, tendrá ultractividad por ser intermedia, siempre que fuera más favorable que las posteriores, situación que opera en el presente caso al tener trascendencia en la favorabilidad de la pena.

2. Sentencia de la Corte Suprema

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú

Recurso de Nulidad 000851-2021

31/08/2021

Robo Agravado Art. 189.1

Sumilla:

En el caso concreto, es posible concluir que la versión de la víctima no es contradictoria. Tampoco es inválida. Por el contrario, tiene contenido incriminatorio que ha sido corroborado periféricamente con la declaración efectuada por el efectivo policial interviniente Erick Eloy Escobar Arena, las actas levantadas con motivo de la intervención e incluso, en cierta medida, con la propia manifestación a nivel preliminar del recurrente Escalona Monsalve, quien el día de los hechos manejaba el vehículo menor de placa de rodaje número 1233-OC donde se movilizó el conformado Manuel Huauya Rodríguez. Ambos participaron del hecho delictivo, con despliegue distinto, pero bajo una misma resolución criminal. Por tanto, responden como coautores conforme así lo ha concluido la Sala Superior. En consecuencia, la condena ha de ser ratificada **EXTRACTO RELEVANTE:**

“Tercero: (...) Si se tiene en consideración la uniforme negativa del imputado, lo tardío de la denuncia –entre el suceso denunciado y la efectiva denuncia policial– y la retractación de la víctima –además su madre no ofrece una versión alternativa

que consolide el primer cargo contra el imputado: (...), es de concluir que la prueba de cargo no es suficiente para sancionar penalmente al imputado. Rige el principio in dubio pro reo. Las pericias médico legal y psicológica no permiten atribuir con certeza la autoría de los hechos al encausado Carranza Vásquez.”

3. Sentencia de la Corte Suprema

Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú

Casación 001884-2018

23/08/2021

Delito: Robo Agravado Art. 189

Sumilla:

Cuando una sentencia de apelación vulnera los principios de legalidad, acusatorio y congruencia procesal; así como adolece de defectos de motivación, la casación es fundada.

4. Sentencia de la Corte Suprema

Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú

Recurso de Nulidad 001775-2019

10/08/2021

Delito Robo Agravado

Sumilla:

La doctrina consolidada en la jurisprudencia de esta Alta Corte en relación con las reglas de participación criminal del delito señala que, el supuesto de complicidad primaria se da por el aporte necesario en la comisión del delito y la oportunidad de dicho aporte debe darse desde la etapa de preparación del hecho y ejecución “[...] son susceptibles de ser considerados actos de complicidad primaria aquellos actos que sean esenciales para que el autor pueda cometer el delito”

5. Sentencia de la Corte Suprema

Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú

Recurso de Nulidad 001438-2019

03/08/2021

Delito: Robo Agravado Art. 189

Sumilla:

Al recurrente se le redujo, desde la pena mínima abstracta para el delito (doce años), cuatro años de pena privativa de libertad. Disminución que se justifica en razón a la bonificación procesal por conclusión anticipada del proceso. No se verifica la concurrencia de otras atenuantes privilegiadas que posibiliten una reducción menor, debiéndose confirmar la sentencia emitida por la Sala Superior al encontrarse arreglada a ley. Los principios que regula la imposición de la sanción penal no se han visto conculcados.

6. Sentencia de la Corte Suprema

Sala Penal Permanente Suprema del Perú

Recurso de Nulidad 000690-2021

03/08/2021

Delito Robo Agravado Art. 189

Sumilla

El recurso interpuesto se desestima porque existe suficiencia probatoria que, al valorarse de manera conjunta, permite establecer la responsabilidad penal de los recurrentes en el delito de robo agravado.

7. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú

Casación 002092-2019

23/07/2021

Robo Agravado Art. 189**Sumilla:**

Se concibe a los contraindicios como contraprueba indirecta, consistente en la prueba de algún hecho con el cual se trata de desvirtuar la realidad de un acontecimiento indiciario, ante su incompatibilidad entre sí, o al cuestionar aquel la realidad de este, debilitando su fuerza probatoria. Ahora bien, pueden ser contraindicios tanto otros indicios como pruebas directas, lo realmente relevante es que desvirtúen la alta probabilidad proporcionada por el indicio actuado. Sin embargo, la impugnada incurre en ausencia de motivación sobre los presuntos contraindicios concurrentes, a la luz del derecho.

8. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú

Casación 000354-2019

23/07/2021

Robo Agravado.

Sumilla:

La discrecionalidad del Ministerio Público no lo exime de solicitar la prórroga del plazo al juez de la investigación preparatoria en los casos complejos referidos a organizaciones criminales, pese a que no hiciera uso de la totalidad del plazo legal, en virtud de los principios de plazo razonable y de interdicción de la arbitrariedad.

9. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú

Recurso de Nulidad 001113-2019

22/07/2021

Robo agravado

Sumilla:

Los elementos de prueba analizados avalan la decisión asumida por el Tribunal de Mérito, en cuanto a la responsabilidad penal del recurrente Baroni Calderón. Los motivos invocados por este decaen y se ha desvirtuado la presunción de inocencia que le asiste. No subyace una versión alternativa a los hechos, por lo que su condena por robo agravado debe ser ratificada.

10. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Sala Penal Transitoria

Materia: Robo

Fecha de Resolución: 25 de Abril de 2016

Recurso de Nulidad N°2577-2014-Amazona

Emisor: Sala Penal Transitoria

Sumilla:

“En el delito de robo, el bien jurídico protegido es el patrimonio –específicamente la posesión-, pero, además, también la vida y la integridad física de las personas; hecho que lo configura como un delito compuesto o pluriofensivo”.

XI. DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS, COMENTADAS (UTILIZAR EL SISTEMA APA ÚLTIMO), DOCTRINAS CITADAS DEBEN FIGURAR EL COMENTARIO PERSONAL DE ESTAS.

1. LIBRO: LA PRUEBA PENAL

- AUTOR: PABLO TALAVERA ELGUERA
- AÑO DE PUBLICACIÓN: 2017
- INSTITUTO PACÍFICO
- PRIMERA EDICIÓN: JUNIO 2017

EL TESTIMONIO ÚNICO EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL

En las páginas 168/169, a propósito del Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, que en su fundamento décimo que señala que tratándose de las declaraciones de un agraviado, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza son: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva; b) Verosimilitud; y, c) Persistencia en la incriminación.⁽¹⁾

COMENTARIO PERSONAL

Este acuerdo plenario es aludido en muchas ejecutorias para valorar la declaración de la agraviada en un delito de violación sexual, sea que la víctima sea menor de edad o mayor de edad. La víctima como único testigo de los hechos, es la que puede

¹Talavera Elguera, Pablo (2017). *La Prueba Penal*. Perú: Instituto Pacífico.

declarar por lo que sabe y conoce. Es una testigo directo y su declaración para ser considerada prueba válida de cargo debe reunir los requisitos que se exige en el fundamento décimo. Con relación al requisito de incredibilidad subjetiva se debe tener en cuenta las condiciones personales de la víctima. La verosimilitud, requiere que el testimonio único incriminatorio debe venir corroborado por otros medios de prueba de carácter objetivo que lo dote de credibilidad. Finalmente la persistencia en la incriminación por parte del testigo único o víctima del hecho ilícito sonlista en que la versión debe ser uniforme a lo largo del proceso, no debe ser ambiguo, ni general, ni vago, así como coherente. NO deben existir contradicciones.

2. LIBRO: LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA INDEMNIDAD SEXUAL

- AUTOR: RAMIRO SALINAS SICCHA
- 3ª EDICIÓN
- INSTITUTO PACÍFICO
- SEPTIEMBRE DEL 2016

EL ERROR DE TIPO EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL.

El autor sostiene al explicar el error de tipo previsto en el primer párrafo del artículo 14 del CP es el desconocimiento o falso conocimiento de un elemento del tipo penal, que origina según su invencibilidad o vencibilidad, la exclusión de la responsabilidad penal o la sanción de la infracción como culposa cuando estuviera prevista como tal en la ley.

El error de tipo es aquel error o ignorancia sobre uno o todos los elementos que integran el tipo objetivo – la calidad del sujeto activo, la calidad de la víctima, el comportamiento activo u omisivo, las formas y medios de la acción, el objeto material, el resultado, la relación de causalidad y los criterios para imputar objetivamente el resultado activo u omisivo. A lo que se debe agregar que este error puede recaer sobre cualquiera de los elementos del tipo objetivo, ya sean descriptivos u omisivos. (Páginas 213/214)⁽²⁾

COMENTARIO PERSONAL:

El error de tipo está contemplado en el primer párrafo del artículo 14 del Código Penal. Este error de tipo es aplicado en las resoluciones (sentencias) que dictan las órganos jurisdiccionales y muchas veces absuelven de la acusación fiscal al imputado cuando en los hechos ha concurrido un error de tipo vencible o invencible. Siendo como es el delito de violación sexual un delito eminentemente doloso y no cabe la culpa en este hecho criminal, si concurre el error de tipo vencible corresponde absolver al imputado.

Un error de tipo invencible se da cuando el agente activo percibe que la víctima cuenta con más de catorce años de edad y la propia víctima le dice que cuenta con 16 años de edad y no hay ningún modo de averiguar la exactitud de su edad, si aparenta tener esa edad que la propia víctima dice, cuando en la realidad tiene trece años de edad.

²Salinas Siccha, Ramiro (3° Edición)(2016). *Los Delitos contra la Libertad y la Indemnidad Sexual*. Perú: Instituto Pacífico.

3. LIBRO: DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL

- AUTOR: JORGE E. BUOMPADRE
- AÑO: 2000
- Págs. 364

EL AGRAVANTE EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL

La agravante es de aplicación a los autores del acceso carnal sexual cuando la víctima es su madre o padre, hijo o hija, consanguínea o adoptiva, nieto o nieta, hermano o hermana, nuera, yerno, suegra, suegro. Es indispensable que el agente conozca el vínculo que le une con la víctima. El error sobre esta circunstancia excluye el dolo del tipo agravado, subsistiendo el supuesto del tipo básico. ⁽³⁾

COMENTARIO PERSONAL

El delito contra la libertad sexual o contra la indemnidad sexual. El delito de violación sexual es eminentemente un delito doloso. No es un delito culposo. Eso también comprende en la agravación o en la circunstancia agravante, cuando se perpetra contra una persona muy cercana, para que la circunstancia agravante se configure debe el agente activo tener conocimiento que la víctima o sujeto pasivo es su pariente. Si el agente activo no tiene conocimiento que la víctima es su pariente, la circunstancia agravante no concurre y debe ser sancionado por el tipo base. La circunstancia agravante, agrava la pena.

³Buompadre, Jorge E. (2000). *Derecho Penal Parte Especial*. Perú: Instituto Pacífico, pp. 364.

4. LIBRO: JURISPRUDENCIA VINCULANTE

- AUTOR: JOSÉ LUIS CASTILLO ALVA
- TOMO I
- INSTITUTO PACIFICO
- AÑO: 2016
- Página: 273

BIEN JURÍDICO TUTELADO EN EL DERECHO PENAL SEXUAL

La judicatura Penal Suprema ha establecido recientemente en el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 del seis de diciembre del dos mil once, en el fundamento 16 que, en los atentados contra personas que no pueden consentir jurídicamente, cuando el sujeto pasivo es incapaz porque sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo mental, o por su minoría de edad, lo protegido no es una inexistente libertad de disposición o abstención sexual sino la llamada “intangibilidad” o “indemnidad sexual”. Se sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque existe tolerancia de la víctima, lo protegido son las condiciones físicas o psíquicas para el ejercicio sexual en libertad. Asimismo, en el Fundamento 15 se ha fijado que el bien jurídico en el derecho penal sexual no es una difusa moral sexual, la honestidad, las buenas costumbres o el honor sexual (...). ⁽⁴⁾

⁴Castillo Alva, José Luis (2016). *Jurisprudencia vinculante*. Perú: Instituto Pacifico, pp. 273.

COMENTARIO PERSONAL

Lo expuesto por el Dr. José Luis Castillo Alva se refiere al bien jurídico tutelado en el derecho penal sexual para personas con capacidad física y psíquica para decidir libremente; y, el bien jurídico tutelado en el derecho penal sexual para personas con no tienen esa capacidad física y psíquica para decidir libremente su sexualidad. Se ha desterrado que el bien jurídico tutelado no es el honor sexual. La dogmática penal hasta antes de 1991, consideraba que el bien jurídico tutelado es el honor sexual. El título era “delitos contra el honor sexual”. Ese bien jurídico está claro a partir de 1991, con el nuevo Código Penal que para personas que pueden consentir libremente en formar positiva o negativa, el bien jurídico es la libertad sexual; para personas que no pueden consentir jurídicamente porque son menores de 14 años o porque sufren una discapacidad mental, por anomalía psíquica o retardo mental, el bien jurídico tutelado es la indemnidad sexual o intangibilidad sexual. Eso está claro en la dogmática penal y en la judicatura nacional.

5. LIBRO: JURISPRUDENCIA VINCULANTE (PENAL, PROCESAL PENAL Y DE EJECUCIÓN PENAL)

- AUTOR: PABLO TALAVERA
 - TOMO: II
 - INSTITUTO PACIFICO
 - AÑO: 2016
 - Pág. 226
-

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICA DEL “ENGAÑO” EN EL DELITO DE SEDUCCIÓN

El “engaño”, pues no debe tener la finalidad de conseguir el consentimiento de la víctima sino facilitar la realización del acceso carnal. El agente engaña al sujeto pasivo sobre su identidad aprovechando su parecido físico con la pareja sentimental de la víctima. Si esta es afectada por el error y se relaciona sexualmente con el agente, a quien cree ser su pareja sentimental, el tipo penal del artículo ciento setentaicinco del Código Penal se habrá configurado. Por el contrario, si el agente hace promesas al sujeto pasivo para que este acepte el acceso carnal, y luego dichas promesas no se cumplen, no se dará el engaño.⁽⁵⁾

COMENTARIO PERSONAL

La Sala Penal permanente ha dictado como doctrina jurisprudencial vinculante el “engaño”, que señala el artículo setenta y cinco del Código Penal. El “engaño” es lo que se vale el sujeto activo para tener el acceso carnal en la víctima, que es siempre una persona de catorce años y menos de 18 años. El “engaño”, ya está aclarado. No constituye el engaño, cuando se hace ofrecimientos para tener el acceso carnal, como es el ofrecimiento para casarse. Ese ofrecimiento no constituye “engaño”.

6. LIBRO: DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA

- AUTORES: VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA y OTROS

⁵Talavera, Pablo (2016). *Jurisprudencia Vinculante (Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal)*. Perú: Instituto Pacífico, pp.226.

- INSTITUTO PACÍFICO
- AÑO: 2015
- Pag 49.

ETAPAS OPERATIVAS DE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA

Al ser la determinación judicial de la pena un procedimiento, ella se desarrolla a través de una secuencia de etapas y actos que debe cumplir el órgano jurisdiccional hasta llegar a un resultado punitivo. Como señala BESIO HERNANDEZ dicho procedimiento “se lleva a cabo a través de varios niveles o pasos sucesivos y concatenados los unos a los otros”. Tradicionalmente se han señalado en la determinación judicial de la pena, dos etapas operativas: la identificación de la pena básica y la individualización de la pena concreta. Cada una de ella tiene una finalidad y dinámica distinta a la vez que responden a la orientación político criminal de dos principios rectores; el principio de legalidad (...) y el principio de pena justa (...). ⁽⁶⁾

COMENTARIO PERSONAL

Que los artículos 45 45-A, 46 y siguientes del Código Penal establecen cómo debe determinarse judicialmente la pena, es bueno tener presente a pena básica o pena abstracta o pena legal o conminada, luego para determinar la pena concreta se debe tener en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes. Si sólo concurren circunstancias atenuantes, se le puede determinar considerando el tercio inferior; si concurren sólo circunstancias agravantes, el tercio superior; y si concurren ambas,

⁶Prado Saldarriaga, Víctor (2015). *Determinación Judicial de la Pena*. Perú: Instituto Pacifico, pp. 29.

circunstancias atenuantes y agravantes, el tercio medio. Esto sin considerar la habitualidad y la reincidencia, que ese caso es superior al tercio superior. Los espacios punitivos están en la ley, pero le corresponde al juez determinar la pena concreta. En el artículo 45-A del Código Penal está la forma en que se debe llegar a establecer la misma

7. LIBRO: PEÑA CABRERA, RAÚL; TRATADO DE DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL 11.

Delito de robo y robo agravado: En cuanto al bien jurídico protegido debemos indicar que el delito de robo es un delito pluriofensivo, pues concurren diversos bienes jurídicos, así tenemos: El patrimonio. La vida o salud - en el caso que medie violencia-, y La libertad de la persona - en el caso que medie amenaza-. Se ha concebido también como un delito complejo, pues concurren varios hechos que están vinculados por una determinada relación jurídica.

COMENTARIO PERSONAL:

Efectivamente en este delito además de afectar el patrimonio de una persona, debe desarrollar la conducta mediante violencia o amenaza. El patrimonio debemos entenderlo como el bien que tiene un valor económico, mediante una relación entre dicho bien y la persona, la cual tiene una protección jurídica. El robo agravado es pluriofensivo porque dicho delito puede concurrir con otros delitos conexos, éstos podrían ser lesiones, homicidio, etc.

8. LIBRO: PEÑA CABRERA, ALONSO RAÚL; DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL, T II, IDEMSA.

“El robo es un delito que atenta contra el patrimonio, concretamente los derechos reales amparados en el ordenamiento jurídico, cuya sustantividad radica en la forma o, mejor dicho los medios que emplea el agente para apoderarse del bien mueble, esto es la violencia y/o la amenaza de peligro inminente para la vida e integridad física del sujeto pasivo de la acción típica (...)” .

COMENTARIO PERSONAL:

El bien jurídico tutelado por este tipo penal es el patrimonio, por cuanto garantiza la protección de los bienes patrimoniales de la persona sujeta de derechos.

El delito de robo se configura con la desposesión y apoderamiento de un bien mueble ajeno con violencia sobre el titular del bien.

9. LIBRO: ROJAS VARGAS, FIDEL- INFANTES VARGAS, ALBERTO- QUISPE PERALTA, LESTER LEÓN. CÓDIGO PENAL. “16 AÑOS DE JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA” TOMO II, PARTE ESPECIAL. 3RA. EDICIÓN. IDEMSA. LIMA – PERÚ

Así mismo se precisa que: “Para la configuración del delito de robo es necesario que exista una vinculación tanto objetiva como subjetiva de la violencia con el

apoderamiento; ello implica, que su empleo haya sido el medio elegido por el agente para perpetrarlo o consolidarlo”.⁷

COMENTARIO PERSONAL:

Los elementos indispensables para que se configure el delito de robo, es necesario que la desposesión del bien ajeno se efectúe con violencia, con dolo.

En este delito se puede emplear diferentes modalidades, uno de ella es el asalto con agresión, el cogoteo, etc.

10. LIBRO: PEÑA CABRERA, ALONSO RAÚL; DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL, T II, IDEMSA

TIPIFICACIÓN DEL DELITO. Como el Robo es la descripción del tipo penal, y el robo agravado, es el agravante de él, se describirá primero el robo.

A LA LUZ DE LA LEGISLACIÓN. CÓDIGO PENAL DE 1991. Estando el C.P. de 1991, vigente a la fecha de ocurrido los hechos, fue el que se aplicó; siendo la descripción típica la siguiente: ROBO Art. 188°.- El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.

⁷Rojas Vargas, Fidel- Infantes Vargas, Alberto- Quispe Peralta, Lester León. Código Penal. “16 años de Jurisprudencia Sistematizada” Tomo II, Parte Especial. 3ra. Edición. IDEMSA. Lima – Perú. Pág. 244 a la fabulación, para lo cual, como se ha expuesto, puede ayudar la pericia psicológica-sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones de carácter periférico que le doten de aptitud probatoria

ROBO AGRAVADO Art. 189°.- La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años, si el robo es cometido: 1. En casa habitada. 2. Durante la noche o en lugar desolado. 3. A mano armada. 4. Con el concurso de dos o más personas 5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga. 6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad. 7. En agravio de menores de edad o ancianos. 8. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima. 9. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas y/o insumas químicos o fármacos contra la víctima. 10. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 11. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación. La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental. Los mencionados Art.(s), sufrieron modificación según lo dispuesto por el Art. 1° de la Ley N° 27472, publicada el 05/06/2001 que modifica el Dec. Leg. N° 896.

Los mismos que a la letra dicen: Art. 188.- ROBO El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Art. 189.- ROBO AGRAVADO. La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo es cometido: 1. En casa habitada. 2. Durante la noche o en lugar desolado.

3. A mano armada. 4. Con el concurso de dos o más personas. 5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos. (Inc. Modificado por el Art. 2 de la LEY N° 28982 publicada el 03/03/2007.

El texto anterior era el siguiente: 5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga.) 11 6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad.

7. En agravio de menores de edad o ancianos. La pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, si el robo es cometido: 1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima. 2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas y/o insumas químicos o fármacos contra la víctima. 3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación. La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

2.2 DESCRIPCIÓN TÍPICA. En el delito de robo agravado al igual que el robo simple, el bien jurídico protegido es el patrimonio específicamente la posesión, pero además también la vida y la integridad física de las personas. Hecho que lo configura como un delito compuesto. Por otro lado está

considerado como un delito complejo o mixto; ésta clase de delitos existe cuando en una sola figura se reúnen varios hechos los cuales constituirían por sí solos infracciones independientes. Según esto en el tipo del delito de robo agravado cada uno de sus componentes es constitutivo, si se analiza de manera independiente de una infracción penal, el empleo de violencia o amenaza.

TIPO DE LO INJUSTO. A. ASPECTO OBJETO.

a) SUJETOS 12 Sujeto Activo.- Será cualquier persona incluyendo el co-propietario, a excepción del propietario. **Sujeto Pasivo.-** Será cualquier persona incluyendo el co-propietario, pero no la persona jurídica que por su índole no puede ser objeto de la violencia física o intimidación que reclama el tipo.

b) ACTOS MATERIALES Los actos materiales son el apoderamiento del bien mueble total o parcialmente ajeno, valiéndose el actor en su propósito de violencia física o intimidación. Apoderamiento, es el acto en virtud del cual el autor toma la cosa, sustrayéndola de su tenedor y dispone para sí, de ella. "Lo que determina la consumación del delito es la disponibilidad del autor sobre lo sustraído, siquiera sea por un breve lapso". La cosa ha de ser mueble, ajena y dotada de valor económico, por mínimo que sea, corpórea o incorpórea, pues cabe la hipótesis que un ciudadano mediante violencia se apodere del abastecimiento del vecino. Violencia, tiene que constituirse con cierta relevancia y el criterio normativo mínimo podría darlo la que es constitutiva de falta, "que será el umbral mínimo imprescindible para que pueda hablarse de robo con violencia", relativo. Para el supuesto que con violencia se tome la cosa, se reputará robo si de algún modo "incide directa o indirectamente sobre la

persona en grado suficiente", entendiendo por "grado suficiente" el productivo de una lesión leve. Siendo así, el "tirón" o "jalón" para arrancarle a la víctima su cartera será hurto, salvo que el daño causado al sujeto pasivo para alcanzar el propósito se corresponde con una lesión constitutiva de falta. Intimidación, se refiere al ataque personal que no implica aplicación de fuerza física sobre el cuerpo de la víctima. La intimidación es la amenaza que se hace a la víctima de causarle un mal inminente para su vida o su integridad corporal. 13 Se trata pues del empleo del medio psicológico, para producir efecto psicológico de temor que anula la oposición o resistencia al ataque, facilitando el apoderamiento. La intimidación puede ser abierta o implícita. En este último caso el agresor se vale de su aspecto y de la circunstancia (nocturnidad). La amenaza intimidante debe ser inmediata y además "previa a la consumación del apoderamiento" o incluso mientras ocurre. Cabe advertir sin embargo que aun cuando lo distintivo del robo agravado, como en el simple, es la violencia ejercida sobre la persona, puede no coincidir la víctima de la agresión con la del robo, como ocurre si se violenta al guardián, y se despoja a la persona jurídica que éste cuidaba. La conducta siempre será de apoderamiento de cosa mueble, total o parcialmente ajenas. ⁸

COMENTARIO PERSONAL:

Una hipótesis central en este tipo penal es que el sujeto activo lo realice con violencia, se apodere del abastecimiento del vecino. El acto de violencia, tiene que tener cierta relevancia para que se configure el delito, es decir el umbral mínimo imprescindible para que pueda hablarse de robo con violencia".

⁸Peña Cabrera, Alonso Raúl; Derecho Penal Parte Especial, T II, IDEMSA Lima-Perú

XII. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL EN EL SISTEMA PROCESAL MIXTO

En el sistema procesal mixto, cuyo modelo se caracteriza en ser un modelo eminentemente inquisitivo y en donde la confesión era una prueba privilegiada. Era muy común escuchar decir: “A confesión de parte relevo de pruebas”. Hoy eso ya no es posible porque está proscrita toda forma de autoincriminación. Le corresponde al Ministerio Público cumplir su papel de titular de la acción penal, que recién lo empieza a cumplir a partir del 2004, en forma progresiva; faltando aún Lima. En el sistema procesal mixto, el Ministerio Público no era un órgano independiente hasta 1981, que se creó el Ministerio Público. En el sistema procesal mixto, la investigación para reunir medios de prueba para probar si el delito se cometió y si el investigado es el responsable del hecho ilícito está a cargo del Juez Instructor. En los procesos sumarios, en el modelo procesal mixto, no hay oralidad, porque la instructiva lo lleva muchas veces el secretario, la preventiva y las testimoniales, también, Sólo en las sentencias interviene el Juez, no hay oralidad, no hay inmediación, no hay publicidad ni menos igualdad de armas. En el modelo procesal mixto, en los recursos de nulidad, sólo hay vista de la causa. Por eso el modelo es menor garantista.

XIII. OPINIÓN ANALÍTICA DE TRATAMIENTO DEL ASUNTO SUB MATERIA (PERSONAL).

- La historia legislativa del delito de Robo Agravado revela que sus sanciones se han caracterizado por su rigor en la mayor parte del mundo.
- El robo agravado es el delito contra el patrimonio que se comete con mayor frecuencia en el Perú con el 34,5% y su tendencia no disminuye.

En el presente caso la sentencia condenatoria además de contener las formalidades dispuestas por la ley ha tenido a los presupuestos establecidos por la jurisprudencia al ensayar una sentencia condenatoria con estricto apego a la prueba actuada y al derecho y es que se sustenta primordialmente en la confesión sincera del mismo procesado.

ANEXO 01: EVIDENCIA DE SIMILITUD DIGITAL

TSP ROBO AGRAVADO Y CONTRA LIBERTAD SEXUAL: ACTOS CONTRA EL PUDOR

por Isabel Betzabel Maldonado Aldana

Fecha de entrega: 01-feb-2022 08:23a.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 1752715908

Nombre del archivo: OBO_AGRAVADO_Y_CONTRA_LIBERTAD_SEXUAL-ACTOS_CONTRA_EL_PUDOR.docx
(19.62M)

Total de palabras: 5755

Total de caracteres: 30143

TSP ROBO AGRAVADO Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – ACTOS CONTRA EL PUDOR

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%

INDICE DE SIMILITUD

18%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

10%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.upci.edu.pe

Fuente de Internet

10%

2

repositorio.unapiquitos.edu.pe

Fuente de Internet

8%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 20 words

Excluir bibliografía

Activo

ANEXO 02: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN O TESIS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UPCI

1.- DATOS DEL AUTOR

Apellidos y Nombres: Maldonado Aldana, Isabel Betzabel
 DNI: 42143724 Correo electrónico: Isabelmaldonado108@gmail
 Domicilio: Calle Arrieta 320 Dpto 203 La Punta Callao
 Teléfono fijo: _____ Teléfono celular: 943438486

2.- IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO Ó TESIS

Facultad/Escuela: Derecho

Tipo: Trabajo de Investigación Bachiller () Tesis ()

Título del Trabajo de Investigación / Tesis:

Materia Penal: ROBO AGRAVADO Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – ACTOS CONTRA EL PUDOR

Materia Civil: ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

3.- OBTENER:

Bachiller () Título (X) Mg. () Dr. () PhD. ()

4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN VERSIÓN ELECTRÓNICA

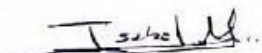
Por la presente declaro que el documento indicado en el ítem 2 es de mi autoría y exclusiva titularidad, ante tal razón autorizo a la Universidad Peruana Ciencias e Informática para publicar la versión electrónica en su Repositorio Institucional (<http://repositorio.upci.edu.pe>), según lo estipulado en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, Art23 y Art.33.

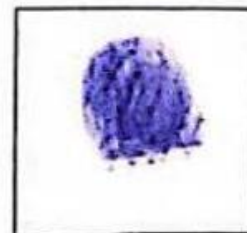
Autorizo la publicación de mi tesis (marque con una X):

(X) Sí, autorizo el depósito y publicación total.

() No, autorizo el depósito ni su publicación.

Como constancia firmo el presente documento en la ciudad de Lima, a los
02 días del mes de Marzo de 2022.


 Firma



**UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMATICA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO**



**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
“ACCIÓN ADMINISTRATIVA CONTENCIOSA”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTORA:

BACH. ISABEL BETZABEL MALDONADO ALDANA

ASESOR:

DR. FERNANDO ARMAS ZÁRATE

ID ORDIC: <https://orcid.org/0000-0002-4390-438X>

DNI N°: 07973958

**LIMA – PERÚ
2022**

MATERIA :Acción Contenciosa Administrativa

NUMERO DE EXPEDIENTE : 00168-2009-0-1801-JR-LA-28

DEMANDANTE :JORGE FÉRNANDEZ HUAMÁN

DEMANDADO : OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL-
ONP

BACHILLER : ISABEL BETZABEL MALDONADO ALDANA

ÍNDICE

I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA	4
II. AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA	5
III. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA-TACHAS-EXCEPCIONES. .	7
IV. FOTOCOPIA(S) DE RECAUDO(S) Y PRINCIPALES MEDIOS PROBATORIOS.	8
V. SÍNTESIS DEL AUTO DE SANEAMIENTO	13
VI. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS	14
VII. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA CONCILIATORIA (SOLO EN ALIMENTOS)	15
VIII. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS	15
IX. ALEGATOS (PROCESO DE CONOCIMIENTO).....	15
X. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DEL JUEZ ESPECIALIZADO	16
XI. SÍNTESIS DE LA APELACIÓN DE SENTENCIA.....	21
XII. FOTOCOPIA DE LA REVISIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LA CORTE SUPERIOR.....	22
XIII. SÍNTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN	29
XIV. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: CASACIÓN O SENTENCIA (ACCIÓN DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL), SI FUERA EL CASO.	30
XV. DIEZ JURISPRUDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS CON INDICACIÓN DE LA SUMILLA DE EXPEDIENTES QUE HUBIEREN SIDO RESUELTOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE CON LA DEL EXPEDIENTE SU NÚMERO Y AÑO.....	38
XVI. DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS, COMENTADAS Y ANALIZADAS POR EL BACHILLER SOBRE LA MATERIA CONTROVERTIDA (UTILIZAR ESTILO APA ÚLTIMO), EN LAS DOCTRINAS CITADAS DEBEN FIGURAR EL COMENTARIO PERSONAL DE ÉSTAS.....	42
XVII. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL O PROCEDIMENTAL, SEGÚN SEA EL CASO.....	52
ANEXO 01: EVIDENCIA DE SIMILITUD DIGITAL.....	56
ANEXO 02: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO	58

I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

Con fecha 23 de setiembre de 2009, Jorge Fernández Huamán interpone demanda contra la Oficina de Normalización Previsional, pretendiendo el reconocimiento y otorgamiento del derecho a percibir la bonificación por gran incapacidad, además se le pague devengados a partir del 16 de mayo de 2004.

Habiendo agota la vía previa, habiendo solicitado por la vía administrativa el Otorgamiento de la Bonificación Mensual por Gran Invalidez, que reconoce los artículos 29 y 30 de la Ley N° 19990.

Entre sus fundamentos expone que mediante Resolución N°000000070-2009-ONP/DPR.SC/DL del 05 de enero de 2009, se resuelve denegar la solicitud de Bonificación por Gran Incapacidad presentada por el actor, asimismo, refiere que dicho beneficio le corresponde por haber sufrido un accidente de tránsito, el cual le ocasiono lesiones graves.

Ante tal circunstancia, el 14 de noviembre de 2005 se expide el Certificado Médico de Discapacidad bajo el amparo del D.S. N° 057-2002-EF, con el que se inició sus trámites para el otorgamiento de la Bonificación, en dicho documento se observa que se declara al actor persona con discapacidad y dependiente de otra persona, siendo una lesión permanente y condición de Gran Discapacidad severa que requiere de otra persona, con un menoscabo global de estado físico, disminuido en un 94%.

Durante el procedimiento del tramite administrativo, la administración le requirió un nuevo Certificado de Discapacidad en aplicación del D.S. N°166-2005-EF publicado el 07 de diciembre de 2005, mediante el cual en su artículo 1°, modifica el segundo y tercer párrafo del artículo 3° del D.S. N° 057-2002-EF. Al respecto, el recurrente señala que se esta violando las garantías del Debido Proceso dejando sin efecto el primer Certificado Médico expedido con los requisitos que establece la ley con afán de desconocer un beneficio que le corresponde percibir.

II. AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA

Que, mediante Resolución Número **CUATRO** de fecha 17 de diciembre de 2009, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo Sub Especialidad Previsional, y **ATENDIENDO: Primero:** Mediante resolución número dos se declaró inadmisibile la demanda interpuesta por Jorge Fernández Huamán a efectos de que en el plazo de tres días cumpla con presentar la resolución que le otorga pensión de jubilación, la cual ha sido presentada dentro del plazo otorgado conforme se verifica del cargo de notificación obrante a folios treinta y seis. **Segundo:** En el presente caso el actor recurre ante este órgano jurisdiccional a interponer demanda en la vía de proceso urgente prevista en el artículo 26° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, el cual establece que para conceder a la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y sus recaudos, se advierta que ***concurrentemente*** exista: a) Interés tutelable cierto y manifiesto, b) Necesidad impostergable de tutela, y c) Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado. **Tercero:** Sin embargo, de la verificación de la demanda y anexos se constata que la vía urgente no es la vía eficaz para la tutela del derecho que invoca el demandante; pues, no cuenta con una etapa probatoria a fin que esta pueda acreditar su pretensión; y siendo necesario que los requisitos antes señalados deben concurrir simultáneamente; al no ser este el caso, debe procederse conforme a lo señalado en la última parte del artículo 27° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que señala: *“Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se tramitarán conforme a las reglas establecidas para el proceso especial”*. **Cuarto:** Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 51° inciso 1 del Código Procesal Civil: *“Los jueces están facultados para adaptar la demanda a la vía procedimental que considere apropiada, siempre que sea factible su adaptación”* y verificándose que la demanda interpuesta reúne los requisitos de admisibilidad y procedibilidad previstos en los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil además del requisito especial de admisibilidad señalado por el primer inciso del artículo 22° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N°

27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, evidenciándose la legitimidad e interés para obrar del demandante; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo y aplicándose el **principio de favorecimiento del proceso** contenido en el numeral 3) del artículo 2 del mismo cuerpo legal: **ADMÍTASE** a trámite la demanda en la vía de **PROCEDIMIENTO ESPECIAL**; por lo tanto, confiérase **TRASLADO** a la emplazada **OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL** por el plazo de *diez días*; téngase por ofrecidos los medios probatorios que se ofrecen reservándose su admisión y actuación para la etapa procesal correspondiente; y de conformidad con lo establecido en el artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Decreto Supremo N° 013-2008-JUS se **ORDENA** a la demandada para que **REMITA** a este Juzgado el expediente administrativo materia de las actuaciones administrativas cuestionadas en el plazo de ley; al primer otrosí del escrito demanda: Téngase por otorgadas las facultades generales de representación del artículo 74° del Código Procesal Civil a favor del letrado que se indica; al segundo otrosí del escrito de demanda: Téngase presente. **Notificándose. –**

III. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA-TACHAS-EXCEPCIONES.

A través de su Apoderado Judicial la entidad emplazada, presenta escrito de fecha 20 de enero de 2010, donde contesta la demanda dentro del término de ley, exponiendo como principales argumentos de defensa:

El actor percibe mediante Resolución N° 66079-2005-ONP/DC/DL 19990 pensión de invalidez definitiva por la suma de S/.415.00 Nuevos Soles; asimismo se dispuso el incremento por cónyuge e hijo.

De los medios probatorios aportados, el demandante no acredita la existencia de algún recorte en su pensión o el desconocimiento de sus derechos, motivo por el cual la demanda debe ser declarada infundada.

Al demandante no le corresponde el pago de devengados ni intereses.

IV. FOTOCOPIA(S) DE RECAUDO(S) Y PRINCIPALES MEDIOS PROBATORIOS.

INSTITUTO ESPECIALIZADO DE REHABILITACIÓN
"DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 765 INR 2003

La evaluación debe realizarse con el EVALUADO exento de ayudas. Se debe tachar los espacios que no se utilicen.

DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, Y REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR.

Vistas las evaluaciones clínicas especializadas y los protocolos establecidos para determinar la discapacidad, quien suscribe certifica lo siguiente:

APELLIDO PATERNO FERNANDEZ **APELLIDO MATERNO** HUAMAN **NOMBRES** JORGE

SEXO M **EDAD** 38 años **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** TITULAR ☒ RESPONSABLE LEGAL ☐
☒ F ☐ meses ☐ días ☒ CI ☐ OTRO ☐

GRADO DE INSTRUCCIÓN 3 **Nivel concluido** 3

No corresponde = 0, Inicial = 1, Primaria = 2, Secundaria = 3 Técnica = 4, Universitaria = 5, Ninguna = 6

DIAGNOSTICO DEL DANO **CIEM** **2. DIAGNOSTICO ETIOLOGICO** **CIEM**

a. Secuela de Lesión Severa de Nervio Ciático y Sural Izquierdo. T93.4
b. Depresión Mayor Moderado. F32.1

a. Peatón Lesionado por colisión en Automóvil. V03

DEFICIENCIAS (Según CIDDM-OMS) Deficiencia ausente = 0 Deficiencia presente = 1

a. Intelectuales 0 e. De la visión 0
b. Otras deficiencia psicológicas 1 f. Viscerales y otras funciones especiales 0
c. Del lenguaje 0 g. Músculo-esqueléticas 1
d. De la audición 0 h. Generalizadas, sensitivas y otras 1

IMITACIONES (DISCAPACIDADES PARA EJECUTAR ACTIVIDADES)

4.1 GRAVEDAD (Según CIDDM-OMS) 0 = No tiene discapacidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 = Tiene discapacidad

a. Discapacidad de la Conducta 0
b. Discapacidad de la Comunicación 0
c. Discapacidad del cuidado personal 4
d. Discapacidad de la locomoción 3
e. Discapacidad de la disposición corporal 4
f. Discapacidad de la destreza 3
g. Discapacidad de situación 3

1 = Puede realizar la actividad y mantenerla con dificultad pero sin ayuda (D. leve)
2 = Sólo puede realizar la actividad y mantenerla con un dispositivo o ayuda (D. moderada)
3 = Sólo puede realizar la actividad y mantenerla con un dispositivo o ayuda y/o con asistencia de otra persona (D. moderada)
4 = Sólo puede realizar la actividad y mantenerla cuando otra persona está con él la mayor parte del tiempo (D. Severa)
5 = Si esta persona requiere a su vez de una ayuda o dispositivo que le permita tal asistencia (D. severa)
6 = La actividad es imposible de conseguir o mantener aún con ayuda personales (D. Severa)

4.2 TIEMPO DE DISCAPACIDAD años meses días No precisable
0 1 0 5 0 4

Existe fuente de verificación: SI ☐ No ☒

4.3 FECHA DE INICIO día mes año No precisable
1 6 0 5 2 0 0 4

Existe fuente de verificación: SI ☒ No ☐

4.4 ESTADO 2 Sin discapacidad = 0
Con discapacidad pero independiente = 1
Con discapacidad pero autosuficiente (sólo actividades básicas) = 2
Con discapacidad y dependiente de otra persona = 3

4.5 CARÁCTER 2 No discapacidad = 0
Temporal = 1
Permanente = 2

4.6 CONDICION 2 Parcial (discapacidades leves o moderadas) = 1
Total (discapacidades severas) = 2
Gran discapacidad (discapacidades severas y requiere de otra persona) = 3

Lic. INES GAMARRA POMA
Instituto Especializado de Rehabilitación
Dra. Adriana Rebaza Flores
Fecha: 26/10/03 N° Reg. 051683

"Trabajando con calidez para una mejor calidad de vida de la Persona con Discapacidad"
Jr. Vigil N° 535 - Bellavista - Callao - Tel: 429-9690 / 429-9698 Telefax: 429-0611 E-mail: inr@inr.gob.pe, www.inr.gob.pe



OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

RESOLUCION No. 0000000070-2009-ONP/DPR.SC/DL 19990Expediente No. 11300234005

Lima, 5 de Enero del 2009

VISTA:

La solicitud presentada por don JORGE FERNANDEZ HUAMAN, sobre otorgamiento de Bonificación por Gran Incapacidad;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 0000066079-2005-ONP/DC/DL 19990, de fecha 27 de Julio de 2005, se otorgó Pensión de Invalidez Definitiva a don JORGE FERNANDEZ HUAMAN, a partir del 13 de Mayo de 2004;

Que, la Bonificación por Gran Incapacidad se otorga cuando el inválido requiere del cuidado permanente de otra persona para efectuar los actos ordinarios de la vida, de conformidad con el artículo 30° del Decreto Ley N° 19990;

Que, del Certificado Médico N° 0005352, de fecha 20 de Julio de 2007, de la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades de la Red Asistencial Rebagliati-ESSALUD, de folios 236, se determina que el asegurado no requiere del cuidado permanente de otra persona para efectuar los actos de la vida, por lo que no corresponde otorgársele la Bonificación solicitada;

Estando a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19990, la Ley N° 28532 y el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Normalización Previsional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2008-EF.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Denegar la Bonificación por Gran Incapacidad solicitada por don JORGE FERNANDEZ HUAMAN, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

FABRICIO RENATO BOTELO PINTO
2009-01-05 14:00



**SILENCIO:- ADMINISTRATIVO NEGATIVO
Y RESOLUCION FINAL FICTA**

EXP. N° 1113000234005

SEÑOR JEFE DE LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL ONP.

Jorge **FERNANDEZ HUAMAN** con DNI 09890059 señalando domicilio real en el Jr José de la Torre Ugarte N°100 San Martín de Porres-Lima, a UD. Digo:

Que, por conducto regular y habiendo vencido con exceso el termino de 30 dias para que su despacho emita la Resolución Administrativa resolviendo el recurso de apelación interpuesta el 18 de Marzo del 2009, en contra de la denegatoria a mi petición que por ley me ampara., en aplicación del Art.188° numeral 188.1 de la ley N°27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), doy por vencido el término legal y me acojo al **SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO**, que prevé el Art.188° numeral 188.2 del mismo cuerpo Legal, teniéndose por desestimado en forma ficta la **APELACION; COMO TAL, EL PRESENTE DOCUMENTO, TIENE EL VALOR DE RESOLUCION QUE AGOTA LA VIA ADMINISTRATIVA**; quedando expedito mi derecho para recurrir a la Vía Judicial.

ADJUNTO:-

- Copia de mi DNI.
- Copia del recurso de apelación.

SERA JUSTICIA

Lima 6 de Mayo del 2009.

Yuri M. Cadenas Neyra
ABOGADO
C.A.L. 76106

Jorge Fernández Huamán
DNI 09890059.

Oficina	Provisional
C	
12	07.05.09
13	
20	
Cito	
Hombre CR:	Felipe Rojas
Plap / Hinerancia:	Fiori
Ventanilla N°	14



CINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

RESOLUCION No. 0000066079-2005-ONP/DC/DL 19990

Expediente No. 11300234005

Lima, 27 de Julio del 2005

VISTA:

La solicitud presentada por don JORGE FERNANDEZ HUAMAN, sobre Pensión de Invalidez Definitiva.

CONSIDERANDO:

Que, con vista al Documento Nacional de Identidad N° 09890059, se ha comprobado que el asegurado nació el 07 de Marzo de 1967;

Que, según el Informe Inspectivo de folios 158, se ha constatado que el asegurado cesó en sus actividades laborales el 30 de Noviembre de 2002;

Que, la Ley N° 27023 estableció que cuando la enfermedad es terminal o irreversible, entendiéndose como de naturaleza permanente, no se exigirá la comprobación periódica del estado de invalidez, por lo que deberá otorgarse Pensión de Invalidez Definitiva;

Que, visto el Certificado de Discapacidad, de fecha 13 de Junio de 2005, obrante a folios 95, emitido por el Hospital Nacional Cayetano Heredia - Ministerio de Salud, al amparo del Decreto Supremo N° 057-2002-EF, se determinó que la incapacidad del asegurado es de naturaleza permanente a partir del 13 de Mayo de 2004;

Que, de los documentos e informes que obran en el expediente, el asegurado ha acreditado 08 años completos de aportación al Sistema Nacional de Pensiones;

Que, de los párrafos precedentes se concluye que el asegurado ha cumplido con los requisitos exigidos para el otorgamiento de la pensión solicitada, de conformidad a lo establecido en el Artículo 25° inciso (b) del Decreto Ley N° 19990;

Que, de la Solicitud de Prestaciones Económicas de folios 03, se ha constatado que el recurrente solicitó el otorgamiento de la Pensión de Invalidez, el 22 de Junio de 2005; motivo por el cual, el inicio de las pensiones devengadas se genera a partir del 22 de Junio de 2004, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 81° del Decreto Ley N° 19990, el mismo que establece que sólo se abonarán pensiones devengadas correspondientes a un período no mayor de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario;

Estando a lo dispuesto por los Artículos 25°, 26° y 81° del D.L. N° 19990, modificado por la Ley N° 27023, el D.L. N° 25967, la Ley N° 28532 y el Reglamento de Organización y Funciones de la ONP, aprobado mediante R.S. N° 306-2001-EF.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar a don JORGE FERNANDEZ HUAMAN, Pensión de Invalidez Definitiva, por la suma de S/415.00 Nuevos Soles, a partir del 13 de Mayo de 2004, incluido el

NSP M0000330157 V. 003 / 001-PA / 57-OTO-1





OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

incremento por su cónyuge doña ADAD MILAGROS SALINAS ZAPATA y por su hijo JORGE JESUS FERNANDEZ SALINAS, a partir del 13 de Mayo de 2004 hasta el 01 de Octubre de 2019.

Artículo 2°.- Disponer que el abono de las pensiones devengadas se generan a partir del 22 de Junio del 2004, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 81° del Decreto Ley N° 19990.

Artículo 3°.- La Pensión de Invalidez está afecta al descuento del 4% mensual para prestaciones de salud, de conformidad al inciso b) del Artículo 6° de la Ley No. 26790.

Artículo 4°.- La Pensión de Invalidez es incompatible con el desempeño de cualquier trabajo remunerado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

CARLOS ENRIQUE OSORIO TERRONES
Resolución Jefatural N° 041-2004-JEFATURAVOMP

NSP M0000330157 V.003 / 001-PA / 57-OTO-1



V. SÍNTESIS DEL AUTO DE SANEAMIENTO

En Lima, con fecha 25 de enero de 2010, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo Sub Especialidad Previsional, expidió la Resolución Número DIECISÉIS, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28° inciso 28.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 siendo el estado del proceso se procede al **SANEAMIENTO PROCESAL**: no habiéndose deducido excepciones ni defensas previas y verificado de autos la concurrencia de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción: se declara la existencia de una relación jurídica procesal válida y **SANEADO** el proceso.

VI. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

En Lima, con fecha 25 de enero de 2010, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo Sub Especialidad Previsional, expidió la Resolución Número DIECISÉIS, a través de la cual procede a la fijación del punto controvertido:

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: Determinar si corresponde ordenar se reconozca y otorgue al demandante la Bonificación por Gran Invalidez o Incapacidad que reconoce el Decreto Ley N° 19990, más el pago de devengados. **ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: de la parte demandante:** se admite el mérito de los medios probatorios ofrecidos teniéndose presente al momento de resolver;**de la parte demandada:** se admite el mérito de la demanda y anexos;y en relación al EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: advirtiéndose que la materia de controversia del presente proceso versa sobre cuestiones de puro derecho, de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, en concordancia con los principios de dirección e impulso del proceso, economía y celeridad procesal previstos en los artículos II y V del Título Preliminar del Código Procesal Civil aplicables supletoriamente a este proceso, se dispone: **PRESCINDIR** del Expediente Administrativo. **DICTAMEN FISCAL:** de conformidad al estado del proceso y habiéndose prescindido del expediente administrativo **REMÍTASE** los autos al Ministerio Público para que emita el dictamen correspondiente.

VII. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA CONCILIATORIA (SOLO EN ALIMENTOS)

Respecto a este punto, conviene precisar que dicha actuación judicial corresponde a aquellos procesos que son tramitados vía proceso sumarísimo, lo cual no ocurre en el proceso materia de sustentación, puesto que por su naturaleza corresponde ser tramitado vía proceso especialy no requiere dicha actuación judicial.

VIII. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS

JUZGAMIENTO ANTICIPADO: No habiendo medios probatorios que actuar, de conformidad con el artículo 473° del Código Procesal Civil, se prescinde de la Audiencia de Pruebas, declarándose el Juzgamiento Anticipado del Proceso expedito para ser sentenciado previa a la recepción del Expediente Administrativo y al Dictamen Fiscal.

IX. ALEGATOS (PROCESO DE CONOCIMIENTO)

Respecto a este punto, conviene precisar que no hubo Alegatos, por cuanto No habiendo medios probatorios que actuar, de conformidad con el artículo 473° del Código Procesal Civil, se declaró el Juzgamiento Anticipado del Proceso.

X. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DEL JUEZ ESPECIALIZADO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEXTO JUZGADO TRANSITORIO ESPECIALIZADO DE TRABAJO SUB ESPECIALIDAD PREVISIONAL

SENTENCIA

Expediente : 168-2009
Demandante : Jorge Fernández Huaman
Demandado : Oficina de Normalización Previsional - ONP
Materia : Pensiones
Secretario : Maritza Obregón Ñiquen

RESOLUCION NÚMERO DIECISÉIS:

Lima, veintitrés de noviembre de dos mil once

30
12/12

VISTOS; La demanda interpuesta a folios 18 a 24 por **JORGE FERNÁNDEZ HUAMAN** contra **LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL**.

PRETENSIÓN:

Con fecha 23 de septiembre de 2009, llega a esta judicatura la demanda interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional – ONP, solicitando el reconocimiento y respectivo otorgamiento de la Bonificación por Gran Invalidez contemplado en el artículo 30 del Decreto Ley N° 19990; asimismo se pague los devengados de dicha bonificación desde el 16 de mayo de 2004.

FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN:

Entre sus fundamentos expone que mediante Resolución N° 000000070-2009-ONP/DPR.SC/DL del 05 de enero de 2009, se resuelve denegar la solicitud de Bonificación por Gran Incapacidad presentada por el actor; asimismo refiere que dicho beneficio le corresponde por haber sufrido un accidente de tránsito, el cual le ocasiono lesiones graves.

Ante tal circunstancia, el 14 de Noviembre de 2005 se expide el Certificado Médico de Discapacidad bajo el amparo del D.S. N° 057-2002-EF, con el que inició sus trámites para el otorgamiento de la Bonificación; en dicho documento se observa que se declara al actor persona con discapacidad y dependiente de otra persona, siendo una lesión permanente y condición de Gran Discapacidad severa que requiere de otra persona, con un menoscabo global de estado físico, disminuido en un 94%.

Durante el procedimiento del trámite administrativo, la administración le requirió un nuevo Certificado de Discapacidad en aplicación del D.S. N° 166-2005-EF publicado el 07 de diciembre de 2005, mediante el cual en su artículo 1, modifica el segundo y tercer párrafo del artículo 3 del D.S. N° 057-2002-EF. Al respecto, el recurrente señala que se está violando las garantías del Debido Proceso dejando sin efecto el primer Certificado Médico expedido con los requisitos que establece la ley, con afán de desconocer un beneficio que le corresponde percibir.

PODER JUDICIAL

.....
XUANY KARIM REATEGUI MEZA
JUEZ
6º Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo

PODER JUDICIAL

.....
MANUEL JESUS ARANA CÁRDENAS
SECRETARIO JUDICIAL

SOBRE EL TRÁMITE DEL PROCESO:

Una vez admitida la demanda, vía procedimiento Especial mediante resolución número 4, se corre traslado de la misma a la entidad emplazada, otorgándosele 10 días de plazo a fin que cumpla con absolverla.

A través de su Apoderado Judicial la entidad emplazada, presenta escrito de fecha 20 de enero de 2010, donde contesta la demanda dentro del término de ley, exponiendo como principal argumento de su defensa:

- *El actor percibe mediante Resolución N° 66079-2005-ONP/DC/DL 19990 pensión de invalidez definitiva por la suma de S/. 415.00 Nuevos Soles; asimismo se dispuso el incremento por cónyuge e hijo.*
- *De los medios probatorios aportados, el demandante no acredita la existencia de algún recorte en su pensión o el desconocimiento de sus derechos, motivo por el cual la demanda debe ser declarada infundada.*
- *Al demandante no le corresponde el pago de devengados ni intereses.*

Continuando con el trámite del proceso, mediante resolución número 5, de fecha 25 de enero del 2010, se tiene por contestada la demanda; y advirtiéndose de autos la concurrencia de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción se declaró saneado el proceso y por consiguiente la existencia de una relación jurídica procesal válida; asimismo se fijaron los puntos controvertidos, consistentes en:

"Determinar si corresponde ordenar se reconozca y otorgue al demandante la Bonificación por Gran Invalidez o Incapacidad que reconoce el Decreto Ley N° 19990, más el pago de devengados".

Posteriormente, se admiten medios probatorios y se dispone remitir los autos al Ministerio Público, tras la observación de los autos por el Fiscal se elaboró un dictamen previo, corriéndose traslado mediante resolución número 7.

Mediante resolución número 11 de fecha 23 de agosto del 2010, luego que se efectuara el trámite recomendado por el Ministerio Público, se dispuso nuevamente remitir los autos a dicha dependencia, a fojas 108 a 112 en el dictamen respectivo se opina que se declare Infundada la demanda; y habiéndose dispuesto que los autos se pongan a Despacho para sentenciar, esta judicatura procede a expedir sentencia.

ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS:

PRIMERO.- Es derecho de toda persona acceder a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado.

Este derecho es de carácter fundamental para los justiciables, dado que se ejercita en el marco del principio elemental de igualdad consagrado en el inciso 2 del artículo 2 de nuestra Carta

PODER JUDICIAL

XUANY KARIM REATEGUI MEZA
JUEZ

MANUEL JESUS ARANA CARDENAS
SECRETARIO JUDICIAL
6° Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo

Fundamental, pues no solo permite a aquéllos acceder al proceso ejercitando su derecho de acción, sino a usar los mecanismos preestablecidos en las disposiciones adjetivas con el fin de defenderlos durante el proceso y procurar una resolución arreglada a Ley.



SEGUNDO.- Cuestión de la controversia.- Del estudio de los actuados, se verifica que por Resolución N° 0000066079-2005-ONP/DC/DL 19990¹ de fecha 27 de julio de 2005, la Oficina de Normalización Previsional – ONP, resuelve otorgar a don JORGE FERNANDEZ HUAMAN Pensión de Invalidez Definitiva por la suma de S/. 415.00 Nuevos Soles a partir del 13 de mayo de 2004; en función al derecho adquirido por el demandante y bajo el imperio del Decreto Supremo N° 057-2002-EF. Ante lo referido, el 31 de octubre de 2005, el actor solicita ante la administración se otorgue Bonificación por Gran Invalidez; por tanto corresponde a esta judicatura establecer si le corresponde percibir dicha bonificación al demandante y así resolver la controversia suscitada

TERCERO.- Norma aplicable.- Refiere el justiciable que durante el trámite de procedimiento administrativo, la entidad emplazada solicita la presentación de un nuevo Certificado Médico de Invalidez en atención a lo expuesto en el Decreto Supremo N° 166-2005-EF; el cual modifica el segundo y tercer párrafo del artículo 3 del Decreto Supremo N° 057-2002-EF, exigiendo además de la firma del médico tratante, la firma y sello de cada uno de los miembros de la Comisión Médica que evalúa.

De lo expuesto, se observa que la administración no ha valorado lo establecido en el Certificado de Discapacidad presentado por el actor al momento de solicitar la Bonificación, siendo que la solicitud presentada se dio aún con la vigencia del Decreto Supremo N° 057-2002-EF.

CUARTO.- Luego de efectuadas las evaluaciones correspondientes, mediante Resolución N° 0000000070-2009-ONP/DPR.SC/DL 19990², de fecha 05 de enero de 2009; la entidad emplazada resuelve la solicitud presentada, denegando la Bonificación por Gran Incapacidad, fundamentando su decisión, conforme al Certificado Médico N° 0005352 de fecha 20 de julio de 2007³ donde la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades de la Red Asistencial Rebagliati – ESSALUD determina que: “el asegurado no requiere del cuidado permanente de otra persona para efectuar los actos ordinarios de la vida por lo que no corresponde otorgársele la Bonificación solicitada”.

SEXTO.- Medios Probatorios.- De los actuados obra, como acompañado del expediente principal copia Certificada de la Historia Clínica en 103 folios, verificándose en su estudio la evolución del estado físico y mental del recurrente; y que su salud ha ido en deterioro, no mostrando signos de mejoría.

Asimismo, además de la Historia Clínica obra en el expediente administrativo obra el mérito de los siguientes documentos:

1. **Copia de la Ficha de Evaluación Médica⁴, expedida el 09 de julio de 2007**, el cual diagnostica: monoplejía miembro inferior izquierdo y trastorno depresivo recurrente, con un pronóstico irrecuperable; con un grado de dependencia: que requiere apoyo.

¹ Obra a fojas 95 del Expediente Administrativo.

² Obra a fojas 10 del Expediente Principal.

³ Obra a fojas 236 del Expediente Administrativo.

⁴ Obra a fojas 233 del Expediente Administrativo.

PODER JUDICIAL

XUANY KARIM REATEGUI MEZA
JUEZ
Juzgado de Trabajo

PODER JUDICIAL

MANUEL JESUS ARANA CÁRDENAS
SECRETARIO JUDICIAL
6° Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo
CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA DE TRABAJO

2. Asimismo, obra *Copia de la Directiva Sanitaria N° 003 -Minsa/DGSP-V-015*, se evalúa 10 áreas de actividad de la vida diaria arrojado un total de índice 45 lo cual hace indicar que el recurrente es dependiente que requiere apoyo.

De ambas evaluaciones, se expidió:

3. **Certificado Médico N° 0005352, otorgado el 20 de julio de 2007**, el cual considera un menoscabo total del 68%, documento que fue valorado al momento de expedir la resolución N° 000000070-2009-ONP/DPR.SC/DL del 05 de enero de 2009.

De las evaluaciones realizadas se puede observar que el porcentaje del menoscabo no es coincidente con lo prescrito en el Certificado Médico; tal como consta de autos y el cual ha sido objeto de análisis.

SEPTIMO.- A fin de dilucidar la discrepancia suscitada con respecto a los Certificados de Discapacidad, esta judicatura de oficio solicita a la entidad emplazada se sirva a realizar un nuevo examen a fin de dirimir la controversia, para lo cual a fojas 95 del expediente principal, se expide el Certificado Médico de fecha 27 de julio de 2010 realizado por EsSalud en el Centro Red Asistencial Almenara – Hospital Nacional “Guillermo Almenara Irigoyen”, de los resultados se desprende que las características de la incapacidad son de naturaleza permanente y grado total; presentado un menoscabo global del 82%, observándose que la Comisión Evaluadora en ningún extremo se haya pronunciado acerca de que si el paciente requiere de la ayuda de otra persona, sin embargo del estudio y análisis de los documentos obrantes se ha realizado una apreciación razonada de los hechos por cuanto este Despacho considera que el porcentaje descrito en el último Certificado ayuda a dirimir la controversia en cuestión, considerando que la demanda realizada por el actor debe ser estimada en este extremo.

OCTAVO.- Aquí es importante destacar lo referido por nuestra Carta Magna, el cual reconoce la especial protección de las personas que padecen de incapacidad, precisando que las mismas son titulares de derechos fundamentales susceptibles de protección no solo por parte del Estado, sino por parte de la colectividad. En tal sentido, el artículo 7 de la Constitución Política, señala que “... La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”.

NOVENO.- Asimismo, es necesario acotar lo establecido en el artículo 30 de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, que refiere: “Salvo disposición legal diferente la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión”, asimismo el artículo 188 del Código Procesal Civil⁶, establece: “Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”.

En este contexto, con los medios probatorios descritos en los considerandos previos, documentos que no han sido tachados por la emplazada, por tanto conservan su eficacia a efecto de acreditar la postura del actor en el presente proceso; generando convicción a este despacho sobre la existencia de lo peticionado conforme al último Certificado Médico de fecha

⁵ Obra a fojas 232 del Expediente Administrativo.

⁶ Aplicable supletoriamente según la Primera Disposición Final del TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.

PODER JUDICIAL

XUANY KARIM REATEGUI MEZA
JUEZ

6° Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PODER JUDICIAL

MANUEL JESUS ARANA CARDENAS
SECRETARIO JUDICIAL

6° Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

27 de julio de 2010, documento que fue requerido por el Ministerio Público a fin de dirimir la controversia planteada; de lo expuesto este Despacho considera estimar la demanda en este sentido.

DÉCIMO.- Derechos adquiridos.- Respecto del caso que nos ocupa, se observa que el actor es pensionista sujeto bajo el régimen del Decreto Ley N° 19990 habiendo cumplido con los requisitos otorgándole su derecho a Pensión de Invalidez Definitiva mediante Resolución N° 0000066079-2005-ONP/DC/DL 19990, adquiriendo por la misma entidad demandada su pensión conforme a derechos legalmente adquiridos y que son reconocidos por la propia administración.

Asimismo, el actor al momento de presentar la solicitud con el Certificado Médico cumplía con los requisitos conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 057-2002-EF. Por otro lado, la entidad emplazada a la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 166-2005 requirió nuevas evaluaciones para la expedición de otro Certificado, observándose que el recurrente se sometió a dichas evaluaciones cumpliendo también lo dispuesto con este último dispositivo.

Por los motivos expuestos, el recurrente pretende se le reconozca el derecho peticionado en función a lo establecido por el Decreto Supremo N° 057-200-EF, siendo razonable su petición, puesto que, el Decreto Supremo N° 166-2005-EF entró en vigencia el 02 de diciembre de 2005 fecha posterior a la contingencia suscitada en autos.

UNDÉCIMO.- De lo hasta aquí expuesto, se concluye que en cuanto a la fecha que se genera el derecho, la contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento médico que acredita la existencia de la gran incapacidad, esto es desde el otorgamiento del Certificado Médico expedido del 14 de noviembre de 2005, dado que el beneficio deriva justamente de la incapacidad que padece el demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la bonificación por gran invalidez establecida por el artículo 30° del Decreto Ley N° 19990.

DUODÉCIMO.- Costas y costos del proceso: No corresponde el pago de costos y costas conforme a lo dispuesto en el Artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el D. Leg. N° 1067, Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que señala: Las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas.

Por estas consideraciones; en aplicación de lo establecido en el artículo 10 de la Constitución Política del Perú, artículo 38 del Decreto Ley N° 19990; impartiendo justicia a nombre de la Nación, el **SEXTO JUZGADO TRANSITORIO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LIMA – SUB ESPECIALIDAD PREVISIONAL, FALLA:**

1. **DECLARANDO FUNDADA** la demanda interpuesta. En consecuencia:
2. **SE DECLARA NULA** la Resolución N° 0000000070-2009-ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 05 de enero de 2009, que resuelve denegar la Bonificación por Gran Incapacidad.
3. **SE ORDENA** a la entidad demandada, emita nueva resolución otorgando la Bonificación por Gran Incapacidad o Invalidez al demandante bajo los argumentos expuestos en la presente resolución, más devengados e intereses. Sin costos ni costas del proceso.

En los seguros por **JORGE FERNANDEZ HUAMAN** contra la **OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL**. Notificándose.

PODER JUDICIAL
XUANY KARIM REATEGUI MEZA
 JUEZ
 6º Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA


PODER JUDICIAL
MANUEL VESUSCARANA CÁRDENAS
 SECRETARIO JUDICIAL
 6º Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

XI. SÍNTESIS DE LA APELACIÓN DE SENTENCIA.


Constituye materia de agravio formulado por la emplazada lo siguiente:

- a. Carece de asidero jurídico dotar de eficacia probatoria al certificado medico del 14 de noviembre del 2005, en la medida que no fue emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades, conforme lo prescribe el Decreto Supremo N° 166-2005-EF, norma vigente a la fecha en que se expidió el documento cuestionado, por lo cual debió ser aplicada al momento de su elaboración.

**XII. FOTOCOPIA DE LA REVISIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA
ESPECIALIZADA DE LA CORTE SUPERIOR.**


PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SALA TRANSITORIA LABORAL
Exp. N° 168-2009-0-1801-JR-LA-06 (S)



SEÑORES:
TOLEDO TORIBIO
NUE BOBBIO
ESPINOZA MONTOYA

Lima, 07 de diciembre del 2012

I. PARTE EXPOSITIVA:

Vistos:

En Audiencia Pública con las prórrogas de ley e interviniendo como Juez Superior ponente la señora Cecilia Espinoza Montoya.

Constituye materia de grado, la Sentencia N° 16 de fecha 23 de noviembre del 2011, corriente de fojas 137 a 141 que declara fundada la demanda, y nula la Resolución N° 000000070-2009-ONP/DPR.SC/DL19990, que resuelve denegar la Bonificación por Gran Incapacidad ordenándose a la demandada cumplir con emitir nueva resolución otorgando la Bonificación por Gran Incapacidad o Invalidez al demandante, más intereses legales; sin costas ni costos.

Agravios:

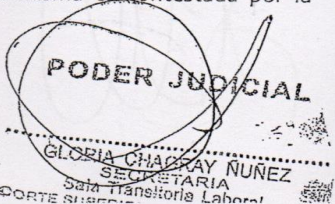
Constituye materia de agravio formulado por la emplazada lo siguiente:

a. Carece de asidero jurídico dotar de eficacia probatoria al certificado medico del 14 de noviembre del 2005, en la medida que no fue emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades, conforme lo prescribe el Decreto Supremo N° 166-2005-EF, norma vigente a la fecha en que se expidió el documento cuestionado, por lo cual debió ser aplicada al momento de su elaboración.

Antecedentes:

b. De la revisión de los actuados se advierte que, el demandante a través de su escrito de demanda y subsanación, corriente de fojas 18 a 24 y de fojas 39, pretende el reconocimiento y otorgamiento del derecho a percibir la bonificación por Gran Invalidez, y se le pague los devengados desde el 16 de mayo del 2004, fecha en que ha sufrido el hecho lesivo por gran incapacidad; la misma es contestada por la

1


PODER JUDICIAL
GLORIA CHADRAY NÚÑEZ
SECRETARIA
Sala Transitoria Laboral
CORTE SUPERIOR



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SALA TRANSITORIA LABORAL
Exp. N° 168-2009-0-1801-JR-LA-06 (S)

emplazada mediante escrito de fecha 20 de enero del 2010, obrante de fojas 48 a 51, contradiciéndola en todos sus extremos; mediante Resolución N° 05, obrante a fojas 52 y 53, se declara saneado el proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida, fijando como único punto controvertido: Determinar si corresponde ordenar se reconozca y otorgue al demandante la Bonificación por Gran Invalidez o Incapacidad que reconoce el Decreto Ley N°19990, más el pago de devengados. Con el Dictamen Fiscal N° 801-2010 proveniente de la 7°ma. Fiscalía Provincial Civil de Lima, obrante de fojas 108 a 112 de los actuados se emite la Resolución N° 16 de fecha 23 de noviembre del 2011, obrante de fojas 137 a 141, declarando fundada la demanda y nula la Resolución N° 0000000070-2009-ONP/DPR.SC/DL19990 de fecha 05 de enero del 2009, ordenando a la demandada emita nueva resolución mas devengados e intereses, sin costos ni costas del proceso; la misma que es apelada por la emplazada mediante escrito de fecha 148 a 157 de los actuados.

II. PARTE CONSIDERATIVA:

1. Mediante Casación N° 626-01-Arequipa se establece que "El Juez Superior tiene la facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones resueltas por el juez inferior, sin embargo cabe precisar que la extensión de los poderes a la instancia de alzada está presidida por un postulado que limita su procedimiento, recogido por el aforismo *tantum appellatum quantum devolutum*, en virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante". (El Peruano 05-11-2001, pág. 7905); en ese sentido, sólo se debe pronunciar sobre el agravio planteado por la demandada en la apelación (de la sentencia), y lo resuelto por el A-quo en relación a ellos (agravios).
2. El Sistema Nacional de Pensiones establecido mediante Decreto Ley N° 19990, contempla tres tipos de prestaciones dependiendo de la contingencia que originase el decaimiento o desaparición de la capacidad laboral del asegurado: a) invalidez, para aquellos que son declarados incapaces por enfermedad o accidente, b) jubilación, para los que alcanzan la contingencia determinada por ley para este goce, y c) sobrevivientes, a favor de determinados familiares del asegurado o pensionista; es el primero de estos tres tipos los que examinaremos a fin de resolver.
3. La prestación por invalidez, que es la que nos ocupa, esta sujeta a determinadas condiciones y restricciones. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional al señalar en la STC N°10183-2005-PA/TC que "la configuración legal del derecho a la pensión determina que sea factible establecer condiciones y restricciones para el goce del derecho fundamental, sin que ello configure su vulneración; [...]" (F15).

PODER JUDICIAL
GLORIA CHAGAY NUÑEZ
SECRETARIA
Sala Transitoria Laboral
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SALA TRANSITORIA LABORAL
Exp. N° 168-2009-0-1801-JR-LA-06 (S)



4. Asimismo, el supremo interprete de la constitución en mas de una sentencia (STC N° 05523-2008-PA/TC y la STC N° 06106-2007-PA/TC) ha señalado que la pensión de invalidez protege el estado de necesidad originado en la carencia de ingresos producida por una situación de incapacidad laboral sobrevenida, siendo esta misma circunstancia la que constituye la contingencia que merece ser protegida. Sin embargo, esta protección está ligada a tres situaciones que se encuentran previstas en el Decreto Ley N° 19990 y que deben configurarse a fin de lograr el acceso al derecho fundamental y que a su vez dan nacimiento a la protección: "1) Debe tratarse de un asegurado considerado inválido (artículo 24); 2) Debe reunir los años aportes y demás condiciones relativas al acaecimiento del riesgo (artículo 25); y 3) Debe cumplir con la calificación del estado de invalidez (artículo 26)."

5. Es así, que conforme al artículo 26° del Decreto Ley N° 19990 se dispone que el estado de invalidez debe ser determinado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (hoy Seguro Social de Salud (EsSalud) o en su caso por los establecimientos de salud pública del Ministerio de Salud (MINSA) o Entidades Prestadoras de Salud (EPS), de acuerdo al contenido que la ONP apruebe, previo examen de una Comisión Médica nombrada para tal efecto en cada una de dichas entidades y con base a las directivas técnicas para el otorgamiento de la pensión de invalidez. Éste mismo artículo ha sido analizado por el Tribunal Constitucional en la citada sentencia N° 05523-2008-PA/TC, señalando que el citado examen médico tiene por finalidad calificar la imposibilidad del asegurado para realizar su trabajo por la pérdida de la capacidad laboral, determinando el tipo de enfermedad y el grado de menoscabo. La calificación médica llevada a cabo constituye uno de los requisitos del procedimiento administrativo mediante el cual la entidad previsional, en uso de sus atribuciones, califica las solicitudes pensionarias evaluando el cumplimiento de los requisitos legales, y finalmente otorga las pensiones de invalidez.

1. Exp. N° 05523-2008-PA/TC, LIVERATA MARGARITA HIDALGO, Fundamento 7. "(...) la pensión de invalidez protege el estado de necesidad originado en la carencia de ingresos producida por una situación de incapacidad laboral. Esta última circunstancia, constituye la contingencia que merece ser protegida (FJ 3). Esta protección está ligada a tres situaciones que se encuentran previstas en el Decreto Ley 19990 y que deben configurarse a fin de lograr el acceso al derecho fundamental y que dan nacimiento a la protección; a saber: 1) Debe tratarse de un asegurado considerado inválido (artículo 24); 2) Debe reunir los años aportes y demás condiciones relativas al acaecimiento del riesgo (artículo 25); y 3) Debe cumplir con la calificación del estado de invalidez (artículo 26)."

PODER JUDICIAL
GLORIA CHAGRAY NUÑEZ
SECRETARIA
Sala Transitoria Laboral
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SALA TRANSITORIA LABORAL
Exp. N° 168-2009-0-1801-JR-LA-06 (S)



6. En ese mismo sentido el decreto ley materia de análisis en su artículo 30² establece la "bonificación por gran invalidez" la cual es entregada al asegurado que no puede valerse por sí mismo para la realización de los actos ordinarios de la vida, siempre que esta condición haya sido acreditada médicamente bajo los parámetros utilizados para el diagnóstico de declaración de incapacidad, ello en concordancia con el artículo 26°.
7. Del análisis de los actuados se desprende que mediante Resolución N° 000006079-2005-ONP/DPR.SC/DL19990, de fecha 27 de julio del 2005, obrante a fojas 38 de autos la demandada otorgó al actor una pensión de Invalidez Definitiva ascendente a S/.415.00 Nuevos Soles a partir del 13 de mayo del 2004; el 31 de octubre del 2005 solicita ante la apelante la "bonificación por gran invalidez", alegando su condición de discapacidad severa y permanente desde el 16 de mayo del 2004, fecha en que ha sufrido el hecho lesivo, siéndole denegada mediante Resolución N° 0000000070-2009-ONP/DPR.SC/DL19990, su fecha 05 de enero del 2009, la cual argumenta que el solicitante no necesitaba del cuidado permanente de otra persona para efectuar los trabajos ordinarios de la vida diaria, conforme al certificado médico N° 0005352, de fecha 20 de julio del 2007.
8. Con respecto al único agravio: De la revisión del acompañado se advierte que la solicitud presentada por el demandante (de "bonificación por gran invalidez") el 31 de octubre del 2005, fue tramitada antes de que entrara en vigencia el Decreto Supremo N° 166-2005-EF que modifica el artículo 3° del Decreto Supremo N° 057-2002-EF, publicado el 06 de abril del 2002, el cual establece las disposiciones para el otorgamiento de la pensión provisional dispuesta en la Ley N° 27585, señalando como requisitos:

"Artículo 3.- De la documentación requerida para la prestación con carácter definitiva:
Para el otorgamiento de la prestación con carácter de definitiva, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 27585, además del Certificado de Trabajo o documento equivalente, se deberá tener en cuenta, cualquiera de los siguientes documentos:

² "Artículo 30.- Si el inválido requiriera del cuidado permanente de otra persona para efectuar los actos ordinarios de la vida, se le otorgará, además de la pensión, una bonificación mensual, cuyo monto será igual a una remuneración mínima vital correspondiente al lugar de su residencia.

Esta bonificación seguirá siendo otorga si el inválido luego transferido a jubilación pero no se tomará en cuenta para el cálculo de las pensiones de sobrevivientes ni del capital de defunción.

La suma de la pensión de invalidez o la de jubilación en el caso de transferencia y de bonificación mencionada, podrá exceder de la remuneración o ingreso de referencia pero no del monto máximo a que se refiere el Art. 78°."

PODER JUDICIAL
GLORIA CHAGRA NÚÑEZ
SECRETARIA
Sala Transitoria Laboral
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SALA TRANSITORIA LABORAL
 Exp. N° 168-2009-0-1801-JR-LA-06 (S)



- Boletas de Pago, debidamente firmadas y/o selladas por el empleador.
- Liquidación de Beneficios Sociales, debidamente firmada y/o sellada por el empleador.
- Declaración Jurada del Empleador, suscrita por el Representante Legal, la cual deberá necesariamente acompañar copia simple del documento que lo acredite como tal.
- Informe (s) de verificación de aportaciones.
- Planilla (s) de pago (s).
- Otros documentos que permitan acreditar los años de aportación necesarios para el otorgamiento de una prestación.

Adicionalmente, para el caso de las prestaciones relacionadas con la invalidez, se deberá tener en cuenta:

- Certificado médico expedido por el Seguro Social de Salud -ESSALUD-, el Ministerio de Salud o por las Entidades Prestadoras de Salud -EPS-, debiendo contener como mínimo la siguiente información: (*)

1. Fecha de emisión del Certificado Médico de Invalidez.
2. Institución a la cual pertenece el médico que evalúa.
3. Centro Asistencial.
4. Servicio/Especialidad.
5. Apellido Paterno del paciente.
6. Apellido Materno del paciente.
7. Nombres del paciente.
8. Número de Documento de Identidad del paciente (L.E./C.I.).
9. Sexo.
10. Edad.
11. Diagnóstico.
12. Discapacidad:
 - 12.1. Temporal
 - 12.2. Permanente.
 - 12.3. No Discapacidad.
13. Grado:
 - 13.1. Parcial.
 - 13.2. Total.
 - 13.3. Gran Discapacidad.
14. Fecha de Inicio de la Discapacidad.
15. Porcentaje de Menoscabo.
16. Observaciones Adicionales.
17. Firma del médico que evalúa.

En el caso de los asegurados que hasta la fecha tienen en trámite su solicitud de prestaciones y que no hayan presentado la documentación señalada en el presente artículo, podrán presentarla ante las Oficinas de Atención al Público que la Oficina de Normalización





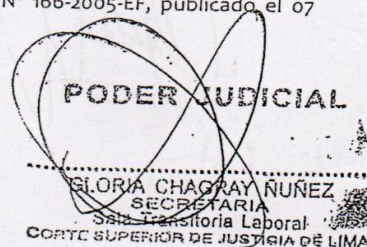
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SALA TRANSITORIA LABORAL
 Exp. N° 168-2009-0-1801-JR-LA-06 (S)



Previsional tiene a nivel nacional, siempre y cuando esta entidad no se haya pronunciado reconociendo o rechazando la solicitud de prestación. ()³ (el resaltado es nuestro).*

9. Es en medio de este trámite, el accionante se realiza el examen médico requerido por el artículo precitado emitiendo la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades de la Red Asistencial Rebagliati-ESSALUD el Certificado Médico N° 0005352 de fecha 20 de julio del 2007, obrante a folios 236 del acompañado, en la cual se señala incapacidad permanente de grado total con un menoscabo global de 68% y no de Gran incapacidad la cual exige que el menoscabo global en el paciente sea de 100%.
10. Si bien el demandante ha presentado otros certificados médicos que no constituyen los emitidos por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades, los cuales adjunta a fojas 4 y 5 de los actuados, de fechas 24 de octubre del 2005 y 14 de noviembre del 2005 respectivamente, sólo en el último de ellos se aprecia la calificación de Gran discapacidad. Debemos resaltar que estos exámenes son anteriores al citado en el párrafo que antecede.
11. Sin embargo estos certificados no son los idóneos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, toda vez que constituiría el incumplimiento por parte del administrado de una exigencia de carácter sustancial dentro del proceso administrativo para resolver su solicitud, por lo que su denegatoria no puede ser considerada una decisión irrazonable de la administración. Además, es de verse a fojas 131 y 132 de los actuados, la Carta N° 61 -CME-OGIT-RAS-ESSALUD-20010 de fecha 30 de noviembre del 2010, emitida por la Oficina de Comisión Médica Evaluadora -OGIT, en la que se señala que devuelve 10 ordenes de atención médica, en las que se encuentra la de FERNANDEZ HUAMAN JORGE, por motivo de que los asegurados no se presentaron a su respectiva Evaluación Médica de Invalidez programadas por el D.L. 19990, documento que no ha sido contradicho por el actor y que evidencia resistencia a someterse a las comprobaciones de su estado de invalidez, pese a estar notificado, aún cuando le pudiera ser favorable los resultados; por lo que no se verifica ninguna vulneración a los derechos del actor.
12. Este mismo razonamiento lo encontramos dentro de la línea jurisprudencial en materia de comprobación del estado de invalidez establecido por el Tribunal Constitucional en el EXP. N° 05523-2008-PA/TC en su fundamento 17 :

³ (*) Párrafos modificados por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 166-2005-EF, publicado el 07 Diciembre 2005.





PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SALA TRANSITORIA LABORAL
Exp. N° 168-2009-0-1801-JR-LA-06 (S)



"En la STC 08919-2006-PA/TC este Tribunal al analizar un caso en que la entidad previsional dispuso que el administrado se sometiese a un examen médico para la acreditación de la enfermedad profesional y éste no se presentó al mismo por motivos personales, declarándose el abandono del proceso, señaló que "[...] no se está frente a una decisión irrazonable de la entidad gestora para denegar el acceso a una pensión de renta vitalicia, sino, por el contrario, ante el incumplimiento por parte del administrado de una exigencia de carácter sustancial dentro del proceso administrativo para resolver una solicitud pensionaria, lo que no puede evidenciar una violación al derecho a la pensión; [...]" (FJ 9). Asimismo, en las SSTC 01432-2007-PA/TC, 05485-2007-PA/TC y 05858-2008-PA/TC se ha precisado que en el caso de que el pensionista se resistiera a someterse a las comprobaciones de su estado de invalidez, pese a estar debidamente notificado, no se verifica ninguna vulneración del derecho a la pensión cuando la Administración procede a la suspensión de la pensión que venía percibiendo."

13. Como puede observarse de los referidos pronunciamientos, el Tribunal identifica que la comprobación del estado de invalidez constituye una carga para el pensionista, quien está obligado a cumplirla, respetando el marco del procedimiento administrativo, razones por las cuales no se puede amparar el petitorio del demandante.

III. PARTE RESOLUTIVA:

Por lo que de acuerdo a los argumentos esgrimidos en la presente resolución, y de conformidad con lo previsto en el inciso 2) del artículo 5° de la Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636, la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, de conformidad con el dictamen emitido por la señora Fiscal Superior de la Séptima Fiscalía Superior Civil de Lima; resuelve:

REVOCAR la Sentencia N° 16 de fecha 23 de noviembre del 2011, corriente de fojas 137 a 141, que declara fundada la demanda; y **REFORMANDOLA**, declara **INFUNDADA** la demanda en todos sus extremos.

En los seguidos por **JORGE FERNANDEZ HUAMAN** con **OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL** sobre **ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA**; y los devolvieron al Sexto Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo de Lima.


PODER JUDICIAL

GLORIA CHAGRAY NÚÑEZ
SECRETARIA
Sala Transitoria Laboral
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

XIII. SÍNTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del recurso de casación interpuesto por el demandante Jorge Fernández Huamán mediante escrito de fecha 31 de enero del 2013 contra la sentencia de vista contenida en la resolución de fecha 07 de diciembre del 2013 que revoca la sentencia de primera instancia que obra a fojas ciento treinta y siete que declaró fundada la demanda, y reformándola declararon infundada la demanda en los seguidos contra la Oficina de Normalización Previsional sobre otorgamiento de bonificación por gran incapacidad.

**XIV. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA:
CASACIÓN O SENTENCIA (ACCIÓN DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL),
SI FUERA EL CASO.**



**SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**

CASACIÓN N° 5302-2013
LIMA
Otorgamiento de bonificación por gran incapacidad
PROCESO ESPECIAL

SUMILLA.- Tienen derecho a percibir la bonificación por gran incapacidad, prevista en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19990, los pensionistas que demuestren tener tal grado de afectación en su salud física que no les sea posible realizar ningún tipo de actividad de la vida diaria, como es alimentarse, atender sus necesidades fisiológicas, moverse o análogas, sin requerir la ayuda permanente de otra persona.

Lima, catorce de noviembre de dos mil trece.-

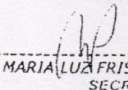
VISTA; con el acompañado, la causa número cinco mil trescientos dos guión dos mil trece guión LIMA, en audiencia pública de la fecha; de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Arévalo Vela; y, producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia:

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante, Jorge Fernández Huamán, mediante escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, que corre a fojas ciento noventa y cinco contra la sentencia de vista contenida en la resolución de fecha siete de diciembre de dos mil trece que obra a fojas ciento setenta y tres, que revoca la sentencia de primera instancia que obra a fojas ciento treinta y siete que declaró fundada la demanda, y reformándola declararon infundada la demanda; en los seguidos contra la Oficina de Normalización Previsional, sobre otorgamiento de bonificación por gran incapacidad.

CAUSAL DEL RECURSO:

Por resolución que obra a fojas cuarenta y cuatro del cuaderno de casación, de fecha ocho de agosto de dos mil trece, se declaró procedente el recurso de casación


MARIA LUZ FRISANCHO APARICIO
SECRETARIA
SEGUNDA SALA TRANSITORIA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL

1

SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

CASACIÓN N° 5302-2013

LIMA

Otorgamiento de bonificación por gran incapacidad
PROCESO ESPECIAL

interpuesto por el demandante, en aplicación del artículo 392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por la Ley N° 29364, por la causal de *infracción normativa del artículo 30° del Decreto Ley N° 19990*; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre dicha causal.


CONSIDERANDO:

Primero: Antecedentes

Mediante escrito que corre a fojas dieciocho, don Jorge Fernández Huamán, interpone demanda contra la Oficina de Normalización Previsional, solicitando el reconocimiento y otorgamiento del derecho a percibir la bonificación por gran incapacidad, además se le pague devengados a partir del dieciséis de mayo de dos mil cuatro. En primera instancia el Sexto Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo Sub Especialidad Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once, que corre a fojas ciento treinta y siete, declaró fundada la demanda. La Sala Transitoria Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil doce, que corre a fojas ciento setenta y tres revocó la sentencia de primera instancia en todos sus extremos, y reformándola la declaró infundada.

Segundo: Delimitación de la controversia

Que, si bien el recurso interpuesto tiene por objeto se analice si ha existido infracción normativa del artículo 30° del Decreto Ley N° 19990, por la sentencia de vista, y como consecuencia de ello se case dicha sentencia, ordenándose se le otorgue al demandante la bonificación por gran incapacidad; esta Sala Suprema considera conveniente que ante la diversidad de criterios existentes en las instancias inferiores respecto del tema, debe emitir un pronunciamiento que permita unificar las decisiones judiciales, esclareciendo cuál es la correcta interpretación del artículo 30° del Decreto Ley N° 19990, entendiéndose por interpretación el asignar a una norma jurídica un


MARÍA LUZ FRISANCHO APARICIO
SECRETARÍA
SEGUNDA SALA TRANSITORIA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL

SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

CASACIÓN N° 5302-2013

LIMA

Otorgamiento de bonificación por gran incapacidad
PROCESO ESPECIAL

significado conforme a los valores y derechos consagrados en la Constitución o contenidos implícitamente en ella.

Tercero: Análisis del artículo 30° del Decreto Ley N° 19990

Que, el artículo 30° del Decreto Ley N° 19990 fue modificado por el artículo 1° del Decreto Ley N° 20604 publicado el siete de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, quedando su redacción en los términos siguientes:

"Si el inválido requiriera del cuidado permanente de otra persona para efectuar los actos ordinarios de la vida, se le otorgará, además de la pensión, una bonificación mensual, cuyo monto será igual a una remuneración mínima vital correspondiente al lugar de su residencia.

<< Esta bonificación seguirá siendo otorga si el inválido luego transferido a jubilación>> [sic]>> pero no se tomará en cuenta para el cálculo de las pensiones de sobrevivientes ni del capital de defunción.

La suma de la pensión de invalidez o la de jubilación en el caso de transferencia y de bonificación mencionada, podrá exceder de la remuneración o ingreso de referencia pero no del monto máximo a que se refiere el Art. 78".

Cuarto: Fundamento de la bonificación por gran incapacidad

Que, la gran incapacidad puede definirse como aquel estado de salud en el cual la persona, como consecuencia de una cuadriplejia, hemiplejia o afectación similar, sufre pérdidas anatómicas o funcionales, que le obligan a necesitar la asistencia de otra persona en los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer, atender sus necesidades fisiológicas, asearse o análogas.

El fundamento de esta bonificación es atenuar la carga que supone para el inválido tener que pagar los servicios de una persona para que lo asista.

Quinto: Pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el artículo 30° del Decreto Ley N° 19990

MARIA LUZ FRISANCHO APARICIO
SECRETARIA
SEGUNDA SALA TRANSITORIA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL



SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

CASACIÓN N° 5302-2013

LIMA

Otorgamiento de bonificación por gran incapacidad
PROCESO ESPECIAL

Que, sobre el caso sub examine, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 4543-2012-PA/TC de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, señala lo siguiente: Que la protección del discapacitado no es sólo constitucional, sino que también encuentra correlación en el campo legislativo, esto es en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19990, y en el artículo 36° del Decreto Supremo N° 011-74-TR, que se remite al artículo 43° del Decreto Supremo N° 002-72-TR para definir la gran incapacidad, como aquel estado en que el accidentado requiere el auxilio o cuidado permanente de otra persona para movilizarse o para realizar funciones esenciales para la vida. Este criterio ha sido reiterado en otras sentencias como la recaída en el expediente N° 4542-2011-PA/TC de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, donde además, se ha precisado que la bonificación por gran invalidez o incapacidad deriva de la pensión de invalidez, más no de la pensión de jubilación.


Sexto: Precedente Vinculante sobre la interpretación del artículo 30° del Decreto Ley N° 19990

Que, teniendo en cuenta el fundamento establecido en el considerando cuarto, este Supremo Tribunal considera que el artículo 30° del Decreto Ley N° 19990, sustituido por el artículo 1° del Decreto Ley N° 20604, debe interpretarse de la manera siguiente:

Tienen derecho a percibir la bonificación por gran incapacidad, prevista en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19990, los pensionistas que demuestren tener tal grado de afectación en su salud física que no les sea posible realizar ningún tipo de actividad de la vida diaria, como es alimentarse, atender sus necesidades fisiológicas, movilizarse o análogas, sin requerir la ayuda permanente de otra persona.

Sétimo: Solución del caso concreto

Que, a fojas treinta y ocho obra la Resolución N° 66079-2005-ONP/DC/DL 19990 de fecha 27 de julio de 2005, en la que se resuelve otorgar al demandante pensión de


MARIA LUZ FRISANCHO APARICIO
SECRETARÍA
SEGUNDA SALA TRANSITORIA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL

SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

CASACIÓN N° 5302-2013

LIMA

Otorgamiento de bonificación por gran incapacidad
PROCESO ESPECIAL

invalidez definitiva por la suma de cuatrocientos quince nuevos soles (S/.415.00) a partir del 13 de mayo de 2004.

La citada resolución tiene sustento en el Certificado de Discapacidad de fecha 13 de junio de 2005 que corre a fojas noventa y cinco del expediente administrativo, en el que se le diagnosticó lesión del nervio ciático y traumatismo, y concluye que padece una discapacidad moderada y que puede trabajar previa capacitación.

Octavo: Que, mediante Resolución N° 0070-2009-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 05 de enero de 2009 que corre a fojas diez, se resolvió denegar la bonificación por gran incapacidad solicitada por el recurrente.

Esta resolución tiene sustento en el Certificado Médico N° 005352 de fecha 20 de julio de 2007 que obra a fojas doscientos treinta y seis, emitida por la Comisión Médica Evaluadora de la Red Asistencial Rebagliati, en la que se diagnostica lesión del nervio ciático y trastorno depresivo recurrente, naturaleza de incapacidad permanente, grado de incapacidad total, con menoscabo del sesenta y ocho por ciento; no se determinó que padecía de gran incapacidad.

Noveno: Que, para acreditar gran incapacidad, el impugnante ha presentado el certificado de discapacidad de fecha 24 de octubre de 2005 que obra a fojas cuatro, emitido por el Instituto Especializado de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores"; donde se le ha diagnosticado lesión del nervio ciático y depresión mayor moderado, señalando además que tiene discapacidad total, pero no gran discapacidad.

A fojas cinco el actor presenta otro certificado de discapacidad de fecha 14 de noviembre de 2005, emitido también por el Instituto Especializado de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores"; en el que a diferencia del anterior y sobre el mismo diagnóstico, determina que tiene gran discapacidad.

Décimo: Que, al existir contradicción entre los documentos citados en el párrafo anterior, el juez de primera instancia mediante resolución de fecha cinco de marzo de

MARIA LUISA FRISANCHO APARICIO
SECRETARIA
SEGUNDA SALA TRANSITORIA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL

SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

CASACIÓN N° 5302-2013

LIMA

Otorgamiento de bonificación por gran incapacidad
PROCESO ESPECIAL

dos mil diez, que corre a fojas sesenta y uno, dispuso que la demandada emita orden de evaluación médica para el actor; como se observa de la Carta N° 61 CME-OGIT-RAS-ESSALUD-2010 de fecha 30 de noviembre de 2009 a fojas ciento treinta y uno, suscrita por el presidente de la Comisión Médica Evaluadora Red Asistencial Sabogal, el actor fue citado para la evaluación médica, lo que se corrobora con la orden de atención a fojas ciento treinta y dos, más no asistió a la misma.

Sin embargo, el demandante presentó el Certificado Médico N° 02-0144-2010 de fecha 27 de julio de 2010 a fojas noventa y cinco, donde se le diagnosticó secuela de traumatismo vertebro medular, paraplejia espástica y vejiga neurogénica, naturaleza de incapacidad permanente, grado de incapacidad total, con menoscabo del ochenta y dos por ciento, en este documento no se indica que tenga gran incapacidad.

Undécimo: Que, analizados los autos se concluye, que los certificados de fojas cuatro y cinco antes anotados, no generan convicción respecto a que el demandante padezca de gran incapacidad; toda vez que, pese haber sido emitidos por la misma entidad y en fecha cercana, se contradicen; y además, no han sido emitidos por una Comisión Médica Evaluadora como lo ha exige el artículo 26° del Decreto Ley N° 19990.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en el precedente vinculante recaído en el expediente N° 2513-2007-PA/TC de fecha 13 de octubre de 2008, estableció que la entidad competente para la acreditación de la enfermedad profesional es la Comisión Médica Evaluadora de incapacidades del Ministerio de Salud, de Essalud o de una EPS, requisito no cumplido al emitirse dichos certificados.

Duodécimo: Que, en el caso sub examine, ninguno de los certificados médicos incluso el presentado por el recurrente determinó que padecía de gran incapacidad, además, se verifica de la ficha de evaluación médica, el examen médico denominado Índice de Barthel y otros documentos que corren de fojas doscientos treinta a treinta y tres del expediente administrativo, que el demandante puede realizar algunos actos

MARIA LUZ ARISANCHO APARICIO
SECRETARIA
SEGUNDA SALA TRANSITORIA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL

SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

CASACIÓN N° 5302-2013

LIMA

Otorgamiento de bonificación por gran incapacidad
PROCESO ESPECIAL

esenciales para su vida, como alimentarse por si mismo; razón por la que, el recurso deviene en infundado.

Décimo tercero: Facultad para establecer Precedente Vinculante

Que, el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, autoriza a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, a establecer precedentes vinculantes en sus resoluciones que contengan principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa; que en el caso de autos teniendo en cuenta; la importancia de la materia que se ha puesto a su consideración, esta Suprema Sala, considera procedente declarar que el criterio establecido en el considerando sexto, constituye precedente judicial vinculante para los órganos jurisdiccionales de la República, debiendo publicarse en el Diario Oficial El Peruano y en la página Web del Poder Judicial.

FALLO:

Por estos fundamentos, y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo; la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

HA RESUELTO:

1. Declarar **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por el demandante, Jorge Fernández Huamán mediante escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece que obra a fojas ciento noventa y cinco.
2. En consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista contenida en la resolución de fecha siete de diciembre de dos mil doce a fojas ciento setenta y tres que revocó la de primera instancia, la reformó y declaró infundada la demanda

MARIA LUZ FRISANCHO APARICIO
SECRETARIA
SEGUNDA SALA TRANSITORIA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL



SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

CASACIÓN N° 5302-20

LIM

Otorgamiento de bonificación por gran incapacidad
PROCESO ESPECIAL

3. DECLARAR que el criterio establecido en el considerando SEXTO de la presente sentencia, constituye precedente judicial vinculante conforme al artículo 37° de Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso-Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.
4. ORDENAR la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Oficial "El Peruano" y en la página Web del Poder Judicial.
5. REMITIR copia de la presente sentencia a los Presidentes de las Cortes Superiores de todos los Distritos Judiciales de la República para su difusión entre los magistrados de las diversas instancias del Poder Judicial.
6. NOTIFICAR con la presente sentencia a don Jorge Fernández Huamán y a la Oficina de Normalización Previsional; y, los devolvieron.-

S. S.

ARÉVALO-VELA

GÓMEZ BENAVIDES

YRIVARREN FALLAQUE

CHAVES ZAPATER

AYALA FLORES

L.Ch./Aaa

MARIA LUZ FRISANCHO AFANADOR
SECRETARIA
SEGUNDA SALA TRANSITORIA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL

XV. DIEZ JURISPRUDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS CON INDICACIÓN DE LA SUMILLA DE EXPEDIENTES QUE HUBIEREN SIDO RESUELTOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE CON LA DEL EXPEDIENTE SU NÚMERO Y AÑO.

JURISPRUDENCIA

1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Casación 005739-2018

Acción Contenciosa Administrativa

SUMILLA:En el caso de autos, las enfermedades e incapacidad que padece el actor es calificada como permanente, irrecuperable y degenerativa, lo que se evidencia que si necesita del cuidado permanente; además conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N.º 166-2005-EF, respecto a la evaluación que se empleará para el caso de Gran Incapacidad califica como dependiente que requiere apoyo - Rango 26 - 50; lo que se corrobora con la fotografía que corre a fojas ciento veintinueve, por lo que se encuentra dentro de los parámetros exigidos por el artículo 30º del Decreto Ley N.º 19990.

2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Casación 000254-2016

Acción Contenciosa Administrativa

SUMILLA:La bonificación por gran incapacidad prevista en el artículo 30º del Decreto Ley N.º 19990, derivan de la pensión por invalidez, y no alcanza a los hijos que adolezcan de incapacidad absoluta, del pensionista que percibe pensión bajo el régimen general.

3. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Casación 005302-2013

Acción Contenciosa Administrativa

SUMILLA: Tienen derecho a percibir la bonificación por gran incapacidad, prevista en el artículo 30 de la Ley N° 19990, los pensionistas que demuestren tener tal grado de afectación en su salud física que no le sea posible realizar ningún tipo de actividad de la vida diaria, como es alimentarse, atender sus necesidades fisiológicas, moverse o análogas, sin requerir la ayuda permanente de otra persona.

4. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Casación 009811-2016

Acción Contenciosa Administrativa

SUMILLA: La invalidez absoluta permanente, constituye una causal válida de extinción del vínculo laboral, siempre que la Comisión Médica Evaluadora y Calificadora de Incapacidades de Essalud o del Ministerio de Salud evalúe físicamente al trabajador con vista de su historia clínica y determine que el menoscabo y grado de incapacidad para el trabajo, es en proporción igual o superior a los dos tercios.

5. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Casación 00254-2016

Acción Contenciosa Administrativa

SUMILLA: La bonificación por gran incapacidad prevista en el artículo 30° del Decreto Ley N.° 19990, derivan de la pensión por invalidez, y no alcanza a los hijos que adolezcan de incapacidad absoluta, del pensionista que percibe pensión bajo el régimen general.

6. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Casación 001235-2018

Acción Contenciosa Administrativa

SUMILLA: El reconocimiento de los años de aportación y consiguiente otorgamiento de pensión de jubilación por la demandada ONP a favor del demandante, puesto en conocimiento a este Supremo Tribunal, debe

apreciarse como declaración asimilada de dicha parte, en aplicación extensiva del artículo 221 del Código Procesal Civil.

7. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Casación 000561-2018

Acción Contenciosa Administrativa

SUMILLA:Para obtener pensión de invalidez al amparo del Decreto Ley N.º 19846, en el régimen militar y policial, resulta relevante la concurrencia de dos requisitos primero: que ostente la condición de inválido por inaptitud o incapacidad para permanecer en situación de actividad; y, segundo: que el mencionado estado se haya producido en acto o como consecuencia del servicio que le son propias; de tal modo que la lesión, enfermedad o sus secuelas no puedan provenir de otra causa, es decir debe existir la relación de causalidad entre los servicios prestados por el servidor y la inaptitud o incapacidad generada.

8. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Casación 000897-2018

Acción Contenciosa Administrativa

SUMILLA:Conforme al artículo 81 del Decreto Ley N.º 19990, en el caso de autos, corresponde el pago de las pensiones devengadas desde 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la primera solicitud de otorgamiento de pensión de jubilación.

9. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Casación 020258-2017

Acción Contenciosa Administrativa

SUMILLA:Habrá motivación omitida: (a) de manera formal cuando no haya rastro de la motivación misma. (b) de manera sustancial cuando exista: (i) motivación parcial que vulnera el requisito de completitud; (ii) motivación implícita cuando no se enuncian las razones de la decisión y

ésta se hace inferir de otra decisión del juez; y (iii) motivación per relationem cuando no se elabora una justificación autónoma sino se remite a razones contenidas en otra sentencia.

10. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Casación 023663-2017

Acción Contenciosa Administrativa

SUMILLA: Del análisis de los presentes actuados se verifica que el periodo de aportaciones con el que acredita contar el demandante no es suficiente para acceder al otorgamiento de pensión de jubilación, por lo que corresponde declarar infundada su pretensión.

XVI. DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS, COMENTADAS Y ANALIZADAS POR EL BACHILLER SOBRE LA MATERIA CONTROVERTIDA (UTILIZAR ESTILO APA ÚLTIMO), EN LAS DOCTRINAS CITADAS DEBEN FIGURAR EL COMENTARIO PERSONAL DE ÉSTAS.

1. SIGNIFICADO Y EL EMPLEO DE LA EXPRESIÓN “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”

DOCTRINA.

Comentando la Constitución de 1979, el profesor **GUZTAVO BACACORZO-**(Perú), señala que, sobre las materias jurisdiccional y administrativa, dicho Texto Constitucional dejaba claramente identificados tres conceptos: 1. El de unidad de jurisdicción en su artículo 233° inciso 1), según el cual la administración de justicia era ejercida exclusivamente por el Poder Judicial; 2. El de procedimiento administrativo en su artículo 59, regulado ampliamente en el entonces Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos de 1967; y 3. El de proceso contencioso-administrativo en su artículo 240°, al cual, señala dicho autor, modernamente se le conoce como proceso administrativo.

Sobre las relaciones y diferencias entre los conceptos de procedimiento y proceso administrativo, **GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ** señalan que: “(...) el administrado no siempre se encuentra ante la Administración en una posición de pasividad, sino que, también, es titular de situaciones jurídicas activas, de derechos e intereses e, incluso, de verdaderas potestades ejercitables frente a los entes públicos. Cuando éstos actúan, pueden llegar a lesionar tales derechos e intereses (...). Es necesario también establecer un sistema que asegure, en la medida de lo posible, que estos conflictos no surjan y, para el caso de que lleguen a producirse, es necesario igualmente arbitrar unas garantías que permitan una defensa de los derechos e intereses individuales. (...). (...) El procedimiento administrativo es la primera de esas garantías, en tanto que supone que la actividad de la Administración tiene que canalizarse obligadamente a través

de unos cauces determinados como requisito mínimo para que pueda ser calificada de actividad legítima (...). En último término, corresponde a los jueces y Tribunales pronunciarse definitivamente sobre la legalidad de la actuación administrativa, bien revisando a posteriori dicha actuación y anulando, en su caso, aquellos actos administrativos y disposiciones generales que sean disconformes con el ordenamiento jurídico (...), bien poniendo freno por la vía interdictal a aquellas actuaciones de la Administración que constituyan vías de hecho

COMENTARIO:

Queda claro que el procedimiento y el proceso administrativo son dos partes de una misma secuencia, destinada a garantizar los derechos e intereses de los administrados frente a la administración pública. Sin embargo, ambas nociones encuentran diferencias a nivel estructural, competencial y teleológico que las hacen inconfundibles. Mientras el procedimiento es una garantía para los administrados ante la propia administración (la cual es parte del procedimiento), el proceso lo es ante el Poder Judicial (que es un tercero imparcial). Tal diferencia, advertida por la doctrina, también ha merecido reconocimiento legislativo. En Italia, por ejemplo, mientras la Legge 7 agosto 1990 N. 241 regula el “procedimiento amministrativo”, la Legge 21 luglio 2000, N. 205 hace lo propio con el “processo amministrativo”. En igual sentido, llama la atención ver en Argentina como el Código del procedimiento contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires (Ley 12.008), pese a incluir la palabra “procedimiento” en su nombre, tiene un Título I llamado “Del proceso administrativo” (competencia, pretensiones, etc.) y un Título II denominado “De los procesos administrativos especiales” (de ilegitimidad, de impugnación de sanciones, etc.).

Las ideas antes vertidas, han sido asimiladas por el legislador peruano y orientan nuestro ordenamiento jurídico a partir del 11 de octubre del 2001 y, sobretodo, desde el 15 de abril del 2002. En la primera fecha, entró en vigencia la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que reclama la frase “procedimiento administrativo” para las actividades cumplidas entre administrado y administración ante esta última, sean

iniciadas a instancia del primero o de oficio. En la segunda fecha, se puso en vigor la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, la cual reivindica la frase “proceso administrativo” para la relación procesal que se instaura entre administrado y administración ante el Poder Judicial, a causa de la demanda de tutela jurisdiccional que el primero realice frente a una actuación de la segunda.

2. LAS TRANSFORMACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS INTENTOS DE DEFINICIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.

DOCTRINA:

El Jurista **SANTIAGO MUÑOZ MACHADO** (Español), Se ha dicho con alguna frecuencia (y hay razones sobradas para avalar la afirmación) que es difícil encontrar una disciplina científica en la que, como en el Derecho administrativo, el tema del concepto se haya resistido más a una comprensión pacífica por parte de los autores; los criterios que éstos mantienen al respecto varían, en efecto, según coordenadas de tiempo y lugar; los especialistas de un mismo país discrepan, en ocasiones, radicalmente en sus concepciones y es difícil, en cualquier caso, dar con posiciones doctrinales que hayan logrado sobrevivir en su formulación original, durante un número más o menos corto de años. Las causas del fenómeno son, desde luego, variadas, pero cabe destacar, de momento, una de ellas. Como, con toda precisión ha explicado **RIVERO**, una razón fundamental del desacuerdo de la doctrina es que ésta se ha empeñado en una tarea nada fácil de concluir y en exceso ambiciosa; los autores, en efecto, no se han conformado con delimitar el contenido de la disciplina haciendo mención de sus rasgos fundamentales o instituciones básicas, esto es, describiéndola, sino que se han lanzado a la búsqueda de un elemento primario y esencial, de un criterio único que sea capaz de explicar la sustancia de la disciplina y de dar cuenta acabada de sus singularidades. La aplicación de dicho criterio único a las instituciones y comportamientos jurídicos serviría para concretar en cada caso el ámbito del derecho administrativo.

COMENTARIOS:

La traslación de esta idea al campo del Derecho Administrativo será obra fundamental de G. JEZE. Este autor utilizará el concepto de servicio público como fundamento teleológico del Derecho administrativo, y considerará objetivo prevalente de la técnica jurídico administrativa la atención a los medios y procedimientos para alcanzar los objetivos del servicio público; hablar de servicio público equivale a afirmar, según esta concepción, que los agentes públicos, para dar satisfacción regular y continua a ciertas necesidades de interés general, pueden aplicar los procedimientos del Derecho público, es decir, un régimen jurídico especial, y que las Leyes y reglamentos pueden modificar en cualquier momento la organización del servicio público, sin que pueda oponerse a ello ningún obstáculo insuperable de orden jurídico. Esta es la esencia de la teoría: Cuando la Administración gestiona servicios públicos está, sin más, sometida al Derecho Administrativo. Así lo mantendrán también, en línea de continuidad, BONNARD o ROLLAND, entre los más caracterizados.

3. ACTO ADMINISTRATIVO

DOCTRINA:

La realización de la función administrativa exige unas series de actos: El acto administrativo es una especie del acto jurídico, es manifestación de la acción administrativa- según el Jurista, **JESUS GONZALES PEREZ** (Español), las decisiones administrativas no se expresan sólo a través de operaciones materiales, sino también mediante declaraciones intelectuales de origen unilateral o bilateral, de alcance individual o general y de efectos directos o indirectos. Pero la amplitud y extensión de las declaraciones administrativas no siempre se entiende lo mismo por acto administrativo. (**ROBERTO DROMI**).

COMENTARIO:

Uno de los cambios de visión más importantes producidos en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo General, 27444, en comparación con sus antecedentes nacionales, ha sido el nuevo tratamiento jurídico para la relación acto administrativo y procedimiento administrativo.

4. ORIGEN ETIMOLÓGICO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO**DOCTRINA:**

Administración deriva del latín *ad* y *ministratio* que significa "servir". Según el Profesor **ADOLFO G. POSADA**(Español), dice que administrar es la gestión ordenada de negocios e intereses de una persona individual o colectiva, para acomodarse a las exigencias de la realidad. Tradicionalmente, se ha entendido que Administración es una subsunción del Gobierno encargada del buen funcionamiento de los servicios públicos encargados de mantener el orden público y la seguridad jurídica y de entregar a la población diversas labores de diversa índole (económicas, educativas, de bienestar, etc.).

COMENTARIO:

La Administración, a diferencia de los particulares, no tiene fines propios, sino que es una institución cuya única razón de ser y cuya fuente de legitimidad es actuar para satisfacer los intereses generales o públicos.

5. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**DOCTRINA:**

Abogado **RAMÓN A. HUAPAYA**(Perú) sostiene: El objeto del proceso contencioso administrativo es la pretensión procesal, ya quedaron atrás las ideas enraizadas en el ideario doctrinal pasado que señalaban que el objeto del proceso contenciosos administrativo era el objeto de revisión; el proceso

contencioso administrativo es un acabado y legítimo proceso jurisdiccional, pleno, donde el Juez tiene todos los poderes específicos para disponer medidas necesarias para la tutela de los derechos e intereses afectados por la actuación administrativa y para someter está a la legalidad.

COMENTARIO:

El Derecho Administrativo delimita el contenido de las pretensiones procesales del proceso contencioso administrativo, estas solo podrán iniciarse en función a actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo, el contenido del objeto del proceso contencioso administrativo conforme a nuestra Ley del proceso Contencioso Administrativo, está dado por las denominadas actuaciones administrativas impugnables; lo que sucede es que existe una relación estrecha entre las pretensiones y las actuaciones administrativas impugnables; las pretensiones procesales se formulan ante el Juez y se deducen en relación a una actuación administrativa específica.

6. SUJETOS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DOCTRINA:

En principio se caracteriza por la presencia de un sujeto activo (el Administrado), un sujeto pasivo (la Administración) o viceversa, y la resolución de un conflicto por un órgano independiente y neutral, con potestades para restablecer el orden jurídico (un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo). Es un sistema integrado tanto por los órganos judiciales como por la normativa aplicable que rige la materia, tal como lo señaló la profesora y Magistrada Emérita de la extinta Corte Suprema de Justicia, **JOSEFINA CALCAÑO DE TEMELTAS**-(Venezuela). Es menester considerar que la contención o controversia con la Administración se origina por un acto administrativo cuestionado como ilegal o respecto a un derecho subjetivo lesionado, o a la reparación de un daño, producida entre dos partes (el Administrado y la

Administración) y decidido por un órgano del Estado independiente o neutro, dotado de poderes para determinar las consecuencias de la ilegal.

COMENTARIO:

Es menester considerar que la contención o controversia con la Administración se origina por un acto administrativo cuestionado como ilegal o respecto a un derecho subjetivo lesionado, o a la reparación de un daño, producido entre dos partes (el administrado y la administración) y decidido por un órgano del Estado independiente a nuestro, dotado de poderes para determinar las consecuencias de ilegalidad o la lesión y restablecer el orden jurídico. De allí que no se trata de un mero recurso para revisar un acto administrativo, sino de un verdadero proceso contradictorio que resuelve controversias.

La jurisdicción contencioso administrativa está compuesto por un conjunto de órganos judiciales encargados, precisamente, de controlar el cumplimiento del principio de legalidad y legitimidad por parte de la administración pública, es decir, por sus actos, hechos y relaciones jurídico-administrativas, originadas por la actividad administrativa.

7. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DOCTRINA:

Como señala el Docente Ordinario profesor **JORGE E. DANÓS ORDOÑEZ-** (Perú) “en el Perú el Proceso Contencioso - Administrativo constituye el proceso específico previsto por la Constitución para la impugnación ante el Poder Judicial de las decisiones de la Administración Pública a fin de verificar la legitimidad de la actuación de todas las entidades administrativas. Como sabemos, mediante el Proceso Contencioso se garantiza una de las conquistas

básicas del Estado de Derecho cual es la subordinación de toda la actividad administrativa a la legalidad. En tal virtud los afectados por una actuación administrativa violatoria de sus derechos e intereses están constitucionalmente facultados para demandar ante el Poder Judicial la satisfacción jurídica de sus pretensiones contra la Administración Pública.

COMENTARIO:

En síntesis, el antiguo régimen del proceso contencioso tenía como objeto la impugnación del acto administrativo, en tanto que el actual régimen, de control jurisdiccional de la actuación administrativa, tiene como objeto del proceso las pretensiones de las partes (una petición realizada por un sujeto y dirigida a un juez a fin de que una persona distinta le satisfaga un interés o un derecho), lo cual es la mayor innovación de la Ley.

En efecto, la Ley pone de relieve el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los administrados, fundamentalmente a través de sus principios, mecanismos y la noción de ser un proceso de plena jurisdicción, resaltando el control jurisdiccional pleno de los actos administrativos, el cual va más allá del control de legalidad, alcanzando un control que brinde una efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados.

8. LAS PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

DOCTRINA:

Según el Magistrado y Docente **PERCY SALAS FERRO**-(Perú), la pretensión es una de las instituciones centrales del proceso contencioso administrativo porque incide en su inicio, desarrollo y culminación. En el presente artículo el autor aborda, desde una perspectiva teórico-práctica, los aspectos fundamentales de cada una de las pretensiones que se pueden plantear en el proceso contencioso administrativo; entre ellas, la pretensión de nulidad o ineficacia; la pretensión de reconocimiento o restablecimiento del derecho; la pretensión de declaración de contraria a derecho y cese de una actuación material; la pretensión de cumplimiento, y, la pretensión de indemnización.

COMENTARIO:

Como puede observarse, la pretensión resulta ser una institución fundamental del proceso que consiste en la petición concreta que se hace a un órgano jurisdiccional para que ampare la postura del proponente en relación a una controversia o un asunto de su interés. Es una declaración petitoria en torno a la cual gira el desarrollo de todo el proceso. Precisamente por ello, la pretensión termina siendo reconocida como el objeto del proceso. Como se ha indicado, la pretensión para ser tal contiene un pedido concreto del pretensor al órgano jurisdiccional porque considera que el derecho reclamado le pertenece. Tales pedidos en el caso del proceso contencioso administrativo pueden ser: La declaración de nulidad o ineficacia de un acto administrativo, el reconocimiento o restablecimiento de un derecho, la declaración de contraria a derecho y el cese de actuaciones materiales ilegítimas, la realización de una actuación debida, el otorgamiento de una indemnización, etc.

9. EL OBJETO DEL PROCESO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

DOCTRINA:

Según la Doctora en Derecho **MARTA GARCÍA PÉREZ** (España), efectivamente, cuando las normas procesales se refieren al objeto del proceso invocando las pretensiones ejercitables en relación con los actos de la Administración obligan, simplemente, a esperar a que estos se produzcan o a provocarlos previamente mediante la técnica del silencio administrativo. Pero ello no significa que el recurso deba limitar sus pretensiones a la anulación del acto, ni que deba restringirse a las declaraciones sobre los hechos y pruebas realizadas anteriormente en vía administrativa.

COMENTARIO:

El objeto del proceso contencioso-administrativo no está constituido por el "acto administrativo", ni tan siquiera por las pretensiones de anulación y de plena jurisdicción que tradicionalmente se han venido ejercitando. Hoy en día se admite de forma unánime que el objeto del proceso lo constituyen cualesquiera "pretensiones de las partes", literalmente deducidas en relación con los actos de la Administración sujetos al Derecho administrativo, pero admitiéndose su extensión a cualquier forma de actuación o inactividad de la Administración.

9. FINALIDAD DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DOCTRINA:

Según Profesor en Derecho **JORGE CARRIÓN LUGO**-(Perú) La finalidad del proceso contencioso administrativo es, pues, tanto el control jurídico por el Poder Judicial de los actos o de las actuaciones de la administración pública sujeta al Derecho Administrativo, como la efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas o de los derechos personales de los particulares vinculados a los referidos actos.

COMENTARIO:

La finalidad del proceso contencioso administrativo va más allá de ser un mecanismo de revisión del acto administrativo, sino también un mecanismo que brinda a los particulares una efectiva tutela o protección de los derechos de los particulares, lo que se supone también como lo hemos anotado en páginas precedentes, que la ley N° 27584 ha adoptado claramente por el sistema del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción.

XVII. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL O PROCEDIMENTAL, SEGÚN SEA EL CASO.

Demanda

Síntesis de la Demanda

Con fecha 23 de setiembre de 2009, Jorge Fernández Huamán interpone demanda contra la Oficina de Normalización Previsional, pretendiendo el reconocimiento y otorgamiento del derecho a percibir la bonificación por gran incapacidad, además se le pague devengados a partir del 16 de mayo de 2004.

Habiendo agota la vía previa, habiendo solicitado por la vía administrativa el Otorgamiento de la Bonificación Mensual por Gran Invalidez, que reconoce los artículos 29 y 30 de la Ley N° 19990.

Entre sus fundamentos expone que mediante Resolución N°000000070-2009-ONP/DPR.SC/DL del 05 de enero de 2009, se resuelve denegar la solicitud de Bonificación por Gran Incapacidad presentada por el actor, asimismo, refiere que dicho beneficio le corresponde por haber sufrido un accidente de tránsito, el cual le ocasiono lesiones graves.

Ante tal circunstancia, el 14 de noviembre de 2005 se expide el Certificado Médico de Discapacidad bajo el amparo del D.S. N° 057-2002-EF, con el que se inició sus trámites para el otorgamiento de la Bonificación, en dicho documento se observa que se declara al actor persona con discapacidad y dependiente de otra persona, siendo una lesión permanente y condición de Gran Discapacidad severa que requiere de otra persona, con un menoscabo global de estado físico, disminuido en un 94%.

Durante el procedimiento del tramite administrativo, la administración le requirió un nuevo Certificado de Discapacidad en aplicación del D.S. N°166-2005-EF publicado el 07 de diciembre de 2005, mediante el cual en su artículo 1°, modifica el segundo y tercer párrafo del artículo 3° del D.S. N° 057-2002-EF. Al respecto, el recurrente señala que se esta violando las garantías del Debido Proceso dejando sin efecto el primer Certificado Médico expedido con los requisitos que establece la ley con afán de desconocer un beneficio que le corresponde percibir.

Auto Admisorio de la Demanda

Que, mediante Resolución Número **CUATRO** de fecha 17 de diciembre de 2009, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo Sub Especialidad Previsional, **ADMITE** a trámite la demanda en la vía de **PROCEDIMIENTO ESPECIAL**; por lo tanto, confiérase **TRASLADO** a la emplazada **OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL** por el plazo de *diez días*; téngase por ofrecidos los medios probatorios que se ofrecen reservándose su admisión y actuación para la etapa procesal correspondiente; y de conformidad con lo establecido en el artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Decreto Supremo N° 013-2008-JUS se **ORDENA** a la demandada para que **REMITA** a este Juzgado el expediente administrativo materia de las actuaciones administrativas cuestionadas en el plazo de ley.

Síntesis de la Contestación de la Demanda.

A través de su Apoderado Judicial la entidad emplazada, presenta escrito de fecha 20 de enero de 2010, donde contesta la demanda dentro del término de ley, exponiendo como principales argumentos de defensa:

El actor percibe mediante Resolución N° 66079-2005-ONP/DC/DL 19990 pensión de invalidez definitiva por la suma de S/.415.00 Nuevos Soles; asimismo se dispuso el incremento por cónyuge e hijo.

De los medios probatorios aportados, el demandante no acredita la existencia de algún recorte en su pensión o el desconocimiento de sus derechos, motivo por el cual la demanda debe ser declarada infundada.

Al demandante no le corresponde el pago de devengados ni intereses.

Síntesis del Auto de Saneamiento

En Lima, con fecha 25 de enero de 2010, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo Sub Especialidad Previsional, expidió la Resolución Número DIECISÉIS, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28° inciso 28.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 siendo el estado del proceso se procede al **SANEAMIENTO PROCESAL**: no habiéndose

deducido excepciones ni defensas previas y verificado de autos la concurrencia de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción: se declara la existencia de una relación jurídica procesal válida y **SANEADO** el proceso.

Fijación de Puntos Controvertidos

En Lima, con fecha 25 de enero de 2010, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo Sub Especialidad Previsional, expidió la Resolución Número DIECISÉIS, a través de la cual procede a la fijación del punto controvertido:

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: Determinar si corresponde ordenar se reconozca y otorgue al demandante la Bonificación por Gran Invalidez o Incapacidad que reconoce el Decreto Ley N° 19990, más el pago de devengados. **ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: de la parte demandante:** se admite el mérito de los medios probatorios ofrecidos teniéndose presente al momento de resolver; **de la parte demandada:** se admite el mérito de la demanda y anexos; y en relación al EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: advirtiéndose que la materia de controversia del presente proceso versa sobre cuestiones de puro derecho, de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, en concordancia con los principios de dirección e impulso del proceso, economía y celeridad procesal previstos en los artículos II y V del Título Preliminar del Código Procesal Civil aplicables supletoriamente a este proceso, se dispone: **PRESCINDIR** del Expediente Administrativo. **DICTAMEN FISCAL:** de conformidad al estado del proceso y habiéndose prescindido del expediente administrativo **REMÍTASE** los autos al Ministerio Público para que emita el dictamen correspondiente.

Síntesis de la Audiencia de Pruebas

JUZGAMIENTO ANTICIPADO: No habiendo medios probatorios que actuar, de conformidad con el artículo 473° del Código Procesal Civil, se prescinde de la Audiencia de Pruebas, declarándose el Juzgamiento Anticipado del

Proceso expedito para ser sentenciado previa a la recepción del Expediente Administrativo y al Dictamen Fiscal.

El Sexto Juzgado Transitorio Especializado de Trabajo Sub Especializada Previsional emite la Sentencia N° 16 de fecha 23 de noviembre del 2011, corriente de fojas 137 a 141 que declara fundada la demanda, y nula la Resolución N° 0000000070-2009-ONP/DPR.SC/DL19990, que resuelve denegar la Bonificación por Gran Incapacidad ordenándose a la demandada cumplir con emitir nueva resolución otorgando la Bonificación por Gran Incapacidad o Invalidez al demandante, más intereses legales; sin costas ni costos.

La Sala Transitoria Laboral de Lima: REVOCAR la Sentencia N° 16 de fecha 23 de noviembre del 2011, corriente de fojas 137 a 141, que declara fundada la demanda; y **REFORMANDOLA**, declara **INFUNDADA** la demanda en todos sus extremos. En los seguidos por **JORGE FERNANDEZ HUAMAN** con **OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL** sobre ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante la Casación N° 5302 – 2013-LIMA, refiere y establece como precedente vinculante de su sexto considerando de la presente resolución que “Tienen derecho a percibir la bonificación por gran incapacidad prevista en el artículo 30 del Decreto Ley N° 19990, los pensionistas que demuestren tener tal grado de afectación en su salud física que no les sea posible realizar ningún tipo de actividad de la vida diaria, como es alimentarse, atender sus necesidades fisiológicas, moverse o análogas, sin requerir la ayuda permanente de otra persona”.

ANEXO 01: EVIDENCIA DE SIMILITUD DIGITAL

TSP ACCIÓN ADMINISTRATIVA CONTENCIOSA

por Isabel Betzabel Maldonado Aldana

Fecha de entrega: 01-feb-2022 06:35a.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 1752690564

Nombre del archivo: TSP_ACCI_N_CONTENCIOSA_ADMINISTRATIVA.docx (18.71M)

Total de palabras: 6588

Total de caracteres: 37347

TSP ACCIÓN ADMINISTRATIVA CONTENCIOSA

INFORME DE ORIGINALIDAD

10%	10%	1%	2%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	deradmjavierjimenez.blogspot.com Fuente de Internet	5%
2	www.coursehero.com Fuente de Internet	1%
3	static.legis.pe Fuente de Internet	1%
4	Submitted to Corporación Instituto Profesional ESUCOMEX Trabajo del estudiante	1%
5	www.scribd.com Fuente de Internet	1%
6	repositorio.upci.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	vbook.pub Fuente de Internet	<1%
8	dokumen.site Fuente de Internet	<1%

ANEXO 02: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN O TESIS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UPCI

1.- DATOS DEL AUTOR

Apellidos y Nombres: Maldonado Aldana, Isabel Betzabel
 DNI: 42143724 Correo electrónico: Isabelmaldonado108@gmail
 Domicilio: Calle Arrieta 320 Dpto 203 La Punta Callao
 Teléfono fijo: _____ Teléfono celular: 943438486

2.- IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO Ó TESIS

Facultad/Escuela: Derecho
 Tipo: Trabajo de Investigación Bachiller () Tesis ()
 Título del Trabajo de Investigación / Tesis:
 Materia Penal: ROBO AGRAVADO Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – ACTOS CONTRA EL PUDOR
 Materia Civil: ACCIÓN ADMINISTRATIVA CONTENCIOSA

3.- OBTENER:

Bachiller () Título (X) Mg. () Dr. () PhD. ()

4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN VERSIÓN ELECTRÓNICA

Por la presente declaro que el documento indicado en el ítem 2 es de mi autoría y exclusiva titularidad, ante tal razón autorizo a la Universidad Peruana Ciencias e Informática para publicar la versión electrónica en su Repositorio Institucional (<http://repositorio.upci.edu.pe>), según lo estipulado en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, Art23 y Art.33.

Autorizo la publicación de mi tesis (marque con una X):

(X) Sí, autorizo el depósito y publicación total.

() No, autorizo el depósito ni su publicación.

Como constancia firmo el presente documento en la ciudad de Lima, a los
02 días del mes de Marzo de 2022.

Isabel Betzabel Maldonado Aldana
 Firma

